



Iniciativa de
Transparencia
en Infraestructura

Ecuador

Hacia una infraestructura pública más transparente en Ecuador

Primer Informe de Revisión Independiente

CRÉDITOS

© Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST Ecuador)

Página web: costecuador.org

Correo electrónico: ecuador@infrastructuretransparency.org

Grupo Multisectorial CoST Ecuador:

Sector Público

Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción (Quito Honesto)

Sector Privado

Colegio de Ingenieros Civiles del Ecuador (CICE)
Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha (CICP)

Sociedad Civil

Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
Fundación Datalat
Fundación Vinicio Ayala (FVA)

Academia

Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

Gerente País CoST Ecuador

Andrés Alejandro Altamirano Quinde

Investigador CoST Ecuador

Juan Baldeón Salazar

Comisión de Revisión Independiente

Fausto Mejía
Luis Eduardo Carrión

Equipo encargado del proceso de Revisión Independiente

Byron Andrés Morales Chamorro
Melany Sofía Singaña Chasi

Diagramación

Steven Correa Montenegro
Mayo 2026



Este trabajo está creado bajo licencia CC BY-ND 4.0 DE. CoST no se hace responsable de las consecuencias de su uso para otros fines o en otros contextos.

ÍNDICE

Resumen ejecutivo	05
Executive summary	08
1. Introducción	11
1.1 La iniciativa CoST Ecuador	11
1.2 Lineamientos de divulgación de información aplicables	12
1.3 Descripción del sector de la infraestructura pública en Ecuador	13
1.4 Mecanismos de rendición de cuentas	16
2. Metodología de Revisión Independiente	18
Fase 1: Identificación y selección de proyectos	18
Fase 2: Levantamiento de información	20
Fase 3: Verificación In Situ	20
Fase 4: Análisis de información	20
Fase 5: Validación y elaboración del Informe	21
3. Evaluación de los proyectos	23
3.1 Resumen de los proyectos	23
Asfaltado camino vecinal Chuwitayo – Chapintza	23
Puente sobre el río Tigre	23
Puente sobre el río Anzu (Vía El Rosal)	24
Disipador de energía colector El Colegio	24
Alcantarillado barrio La Isla (Yaruquí)	25
Extensión redes de alcantarillado Calderón	25
Asfaltado Vía Gualaceo – Cahuazhún	26
Mejoramiento carpeta asfáltica Laguna de Busa – calle Honorato Vásquez	26
Mejoramiento calles Benigno Ordóñez	26

3.2 Nivel de divulgación de la información	27
3.3 Nivel de precisión de los datos	32
3.4 Análisis del desempeño de los proyectos	35
3.4.1 Análisis de los costos de los proyectos	36
3.4.2 Análisis temporal de los proyectos	40
3.4.3 Análisis de la concurrencia de oferentes	44
4. Análisis de las brechas y riesgos en el desempeño institucional.....	46
4.1 Factores habilitantes de desempeño institucional	46
4.2 Brechas en la gestión de proyectos: riesgos operativos	48
4.3. Valor por el dinero	49
5. Resultados de visitas in situ y entrevistas.....	54
5.1. Transparencia activa y proactiva	55
5.2. Costos, duración y plazos	56
5.3. Competencia y participación	56
6. Reuniones de validación con las entidades evaluadas.....	57
7. Hallazgos clave.....	60
8. Recomendaciones.....	62
9. Bibliografía.....	66
10. Anexos.....	67

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe tiene como objetivo evaluar el nivel de transparencia, calidad de la información y desempeño en la gestión de proyectos de infraestructura pública en Ecuador, a partir de la aplicación del estándar CoST a una muestra de diez proyectos de los sectores de transporte, agua y saneamiento. El análisis busca identificar avances, brechas y riesgos en la gestión de la información y en la ejecución de proyectos, así como generar evidencia que contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el valor por dinero en la inversión pública.

El estudio se fundamenta en información oficial disponible en sistemas institucionales, así como en información proporcionada por las entidades evaluadas y levantada durante las visitas de campo. Metodológicamente, el informe adopta el enfoque del Estándar de Datos de Infraestructura (IDS) de CoST, evaluando la divulgación proactiva y reactiva de información, la precisión de los datos y el desempeño de los proyectos en dimensiones clave como costos, tiempos y competencia. Dado que la moneda de curso legal en Ecuador es el dólar de los Estados Unidos (USD), el análisis de costos se realiza en esta moneda, sin requerir conversiones ni la aplicación de tipos de cambio. De manera complementaria, se incorpora un análisis institucional basado en el enfoque ACTS (capacidad, responsabilidad, confianza y entorno), orientado a identificar factores habilitantes y brechas en la gestión de infraestructura pública.

Desde el punto de vista de la transparencia, los resultados evidencian avances relevantes en la disponibilidad de información, con niveles de divulgación promedio de 80% en modalidad proactiva y 78% en modalidad reactiva. Estos resultados reflejan la existencia de capacidades institucionales para generar y publicar información, particularmente en las fases iniciales del ciclo del proyecto y en los procesos de contratación. Sin embargo, el análisis por fases revela una brecha en la divulgación durante la implementación y finalización de los proyectos, donde la disponibilidad de información desciende significativamente. Esta situación limita la trazabilidad de los proyectos y reduce la capacidad de monitoreo y control durante las etapas más críticas de la ejecución.

En términos de calidad de la información, el análisis muestra un 77% de datos plausibles y un bajo nivel de inconsistencias. No obstante, se identifica como principal limitación la incompletitud de la información, que alcanza el 21% de los datos evaluados. Esta brecha afecta la capacidad de verificar la coherencia entre planificación, ejecución y resultados, especialmente en aspectos clave como modificaciones contractuales, cierre de proyectos y auditorías.

Desde la perspectiva del desempeño de los proyectos, el análisis evidencia comportamientos heterogéneos en términos financieros y temporales. Las variaciones contractuales observadas, con incrementos de hasta 12,02% y reducciones de hasta -21,73%, responden principalmente a mecanismos formales de gestión contractual, lo que indica una capacidad operativa para administrar cambios durante la ejecución. Sin embargo, la documentación pública de estas modificaciones no siempre es suficiente para asegurar su trazabilidad completa. En el ámbito temporal, se identifican diferencias en la duración de las fases del proceso, particularmente entre la adjudicación y el inicio de obra, así como en los plazos de ejecución, lo que refleja variaciones en la capacidad de planificación y gestión entre proyectos y entidades.

En relación con la competencia en los procesos de contratación, el promedio de 11 oferentes por proceso sugiere condiciones generalmente favorables. No obstante, la existencia de casos con baja concurrencia evidencia limitaciones puntuales que pueden afectar la eficiencia y el valor por dinero. Estas situaciones, si bien no son predominantes, requieren un análisis más detallado para comprender sus causas y mitigar posibles riesgos asociados a la falta de competencia efectiva.

A nivel institucional, el análisis evidencia que las principales brechas no se originan en la ausencia de normativa o de instrumentos técnicos, sino en limitaciones en su implementación efectiva. Se identifican debilidades en capacidades técnicas y operativas en algunas entidades, dispersión de la información, ausencia de sistemas integrados de gestión, limitaciones en el monitoreo del desempeño y falta de incentivos para promover eficiencia y mejora continua. Estas brechas afectan la capacidad de las entidades para generar información oportuna, asegurar su publicación sistemática y utilizarla como insumo para la toma de decisiones.



El cruce entre los resultados de divulgación, calidad de datos y desempeño de los proyectos permite identificar una brecha entre la generación de información y su uso efectivo para control, monitoreo y rendición de cuentas. En muchos casos, la información existe, pero no se publica de manera oportuna o en formatos adecuados, lo que limita su aprovechamiento para análisis y supervisión. Esta situación reduce la capacidad de control social e independiente y restringe la posibilidad de anticipar y corregir desviaciones durante la ejecución de los proyectos.

Sobre esta base, el informe plantea recomendaciones orientadas a fortalecer las capacidades habilitantes del sistema, priorizando la mejora en la planificación y estructuración de proyectos, la consolidación de mecanismos de transparencia, la optimización de la gestión contractual y el fortalecimiento de la calidad y verificabilidad de la información. Estas recomendaciones buscan cerrar las brechas identificadas y promover un enfoque de gestión basado en evidencia, que permita mejorar la eficiencia, la trazabilidad y el impacto de la inversión pública.

En conjunto, el informe concluye que el principal desafío radica en la consolidación de sistemas de gestión que aseguren información completa, oportuna y verificable, y que permitan traducir las capacidades existentes en mejores resultados en términos de desempeño, transparencia y valor por dinero en la infraestructura pública.

EXECUTIVE SUMMARY

This report aims to assess the level of transparency, data quality, and performance in the management of public infrastructure projects in Ecuador, through the application of the CoST Standard to a sample of ten projects in the transport and water and sanitation sectors. The analysis seeks to identify progress, structural gaps, and risks in both information management and project execution, while generating evidence to strengthen accountability, decision-making, and value for money in public investment.

The study is based on official information available through institutional systems, as well as data provided by the entities under review and collected during field visits. Methodologically, the report adopts the CoST Infrastructure Data Standard (IDS), assessing proactive and reactive disclosure, data accuracy, and project performance across key dimensions such as cost, time, and competition. As Ecuador's legal tender is the United States dollar (USD), all cost analysis is conducted in this currency, without the need for conversions or exchange rate adjustments. In addition, the report incorporates an institutional analysis based on the ACTS framework (Accountability, Capacity, Transparency, and Systems/Environment), aimed at identifying enabling factors and gaps in public infrastructure management.

From a transparency perspective, the results show significant progress in information availability, with average disclosure levels of 80% for proactive disclosure and 78% for reactive disclosure. These findings reflect the existence of institutional capacities to generate and publish information, particularly in the early stages of the project cycle and in procurement processes. However, phase-level analysis reveals a gap in disclosure during the implementation and completion stages, where information availability drops significantly. This limitation affects project traceability and reduces the capacity for monitoring and oversight during the most critical phases of execution.

In terms of data quality, the analysis indicates that 77% of the data is considered plausible, with a low level of inconsistencies. Nevertheless, the main limitation identified is data incompleteness, which affects 21% of the assessed dataset. This gap undermines the ability to verify consistency between planning, execution, and outcomes, particularly in key areas such as contract modifications, project closure, and audits.

From a project performance perspective, the analysis reveals heterogeneous patterns in both financial and time-related dimensions. Observed contract variations—ranging from increases of up to 12.02% to reductions of up to -21.73%—are primarily associated with formal contract management mechanisms, suggesting an operational capacity to manage changes during implementation. However, public documentation of these modifications is not always sufficient to ensure full traceability. In terms of timelines, differences are identified in the duration of process phases, particularly between contract award and the start of works, as well as in execution periods, reflecting variations in planning and management capacity across projects and entities.

Regarding competition in procurement processes, an average of 11 bidders per process suggests generally favorable conditions. However, the presence of cases with limited participation points to specific constraints that may affect efficiency and value for money. While not widespread, these cases warrant further analysis to better understand their causes and mitigate potential risks associated with limited effective competition.

At the institutional level, the analysis shows that the main gaps do not stem from the absence of regulatory frameworks or technical instruments, but rather from limitations in their effective implementation. Weaknesses are identified in technical and operational capacities in some entities, as well as in fragmented information systems, lack of integrated management platforms, limited performance monitoring, and insufficient incentives to promote efficiency and continuous improvement. These constraints affect the ability of institutions to generate timely information, ensure its systematic disclosure, and use it effectively for decision-making.



The cross-analysis of disclosure, data quality, and project performance highlights a gap between the production of information and its effective use for control, monitoring, and accountability. In many cases, information exists but is not disclosed in a timely manner or in accessible formats, limiting its usability for analysis and oversight. This situation reduces the effectiveness of both social and independent control and constrains the ability to anticipate and correct deviations during project implementation.

On this basis, the report puts forward recommendations aimed at strengthening the system's enabling capacities, with a focus on improving project planning and structuring, consolidating proactive transparency mechanisms, optimizing contract management, and enhancing the quality and verifiability of data. These recommendations are intended to close the identified gaps and promote an evidence-based management approach that improves efficiency, traceability, and the overall impact of public investment.

Overall, the report concludes that the main challenge lies in consolidating management systems that ensure complete, timely, and verifiable information, and in translating existing capacities into improved outcomes in terms of performance, transparency, and value for money in public infrastructure.

1. INTRODUCCIÓN

● 1.1 La iniciativa CoST Ecuador

La **Iniciativa para la Transparencia en la Infraestructura** (CoST – Construction Sector Transparency Initiative) es una red global que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la participación en el sector de la infraestructura pública. Desde el año 2020, Ecuador forma parte de esta iniciativa internacional, implementando sus principios y herramientas en el contexto nacional.

La gobernanza de **CoST Ecuador** se estructura a través de un Grupo Multisectorial (GMS), integrado por representantes del sector público, del sector privado, de la sociedad civil y la academia. Este órgano constituye la instancia de dirección estratégica a nivel nacional, responsable de orientar la implementación de la iniciativa y supervisar el cumplimiento de sus objetivos.

El enfoque de CoST se basa en cuatro pilares:



TRABAJO MULTISECTORIAL

Promover la conformación de espacios de gobernanza colaborativa donde convergen actores del sector público, privado y de la sociedad civil. Estos grupos multisectoriales no solo facilitan el diálogo, sino que también permiten equilibrar intereses, generar confianza y fortalecer la toma de decisiones.



PUBLICACIÓN DE DATOS

Impulsar la divulgación de datos a lo largo de todo el ciclo del proyecto, desde su planificación hasta su ejecución. Esto incluye aspectos como costos, alcance, cronogramas y contratistas, mediante herramientas como el Estándar de Datos de Contratación Abierta para Infraestructura (OC4IDS, por sus siglas en inglés) y el estándar de Datos de Infraestructura de CoST (IDS).



REVISIÓN INDEPENDIENTE

Equipos especializados evalúan la consistencia, integridad y calidad de los datos, identificando posibles riesgos, ineficiencias o anomalías en los proyectos. Este proceso no sólo valida la información, sino que la traduce en hallazgos comprensibles para públicos no técnicos.



RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIAL

Promover el uso activo de los datos por parte de actores como la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia. Estos actores desempeñan un rol clave al visibilizar problemas, generar debate público y exigir mejoras en la gestión de la infraestructura.

● 1.2 Lineamientos de divulgación de información aplicables

El presente informe se sustenta en los requisitos de publicación de información definidos tanto en el marco normativo vigente del país como en el estándar Estándar de Datos sobre Infraestructura de CoST. En ese sentido, se acuerda con las entidades evaluadas que en el marco del proceso de revisión independiente estos requisitos comprenden la obligación de divulgar información relevante de manera proactiva a través de los mecanismos normativos establecidos, así como de garantizar el acceso a la información a solicitud de los usuarios.

En el contexto ecuatoriano, el derecho de acceso a la información pública está garantizado por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), que contempla mecanismos de transparencia activa y pasiva. La transparencia activa implica la obligación de las entidades públicas de divulgar información de manera periódica y proactiva, y la transparencia pasiva reconoce el derecho de los ciudadanos a solicitar y recibir información pública.

Por su parte, la divulgación de información en materia de contratación pública se encuentra regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP) y su reglamento, la cual se implementa a través del Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE), administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). El SOCE es un sistema que funciona como repositorio central obligatorio de información, en el que las entidades contratantes deben publicar de manera proactiva los documentos habilitantes, precontractuales, contractuales y de ejecución de los proyectos de obra.

De manera complementaria, las Normas de Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado establecen lineamientos para la generación, custodia y disponibilidad de documentación de respaldo, asegurando la integridad, trazabilidad y verificabilidad de la información relacionada con la gestión de proyectos públicos.

En este contexto, los estándares de CoST – Infrastructure Transparency Initiative aportan un marco de referencia para fortalecer la transparencia en infraestructura pública, al promover la divulgación estructurada, oportuna y completa de información a lo largo de todo el ciclo del proyecto. En particular, el Estándar de Divulgación de CoST (IDS) a utilizar en la evaluación, define un conjunto de datos clave que deben publicarse, incluyendo información sobre identificación del proyecto, procesos de contratación, adjudicación, ejecución y resultados.

● 1.3 Descripción del sector de la infraestructura pública en Ecuador

El sector de la infraestructura pública en Ecuador constituye un eje central para el desarrollo económico y social, en la medida en que sustenta la provisión de servicios esenciales, la conectividad territorial y la dinamización de la actividad productiva. Su desempeño no solo incide en la competitividad y el crecimiento, sino también en la reducción de brechas territoriales y en el acceso equitativo a servicios básicos.

En el país, la provisión de infraestructura se desarrolla bajo un modelo descentralizado, en el que coexisten distintos niveles de gobierno con competencias diferenciadas. Mientras el Gobierno Central concentra la ejecución de proyectos de alcance nacional y estratégico, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tienen a su cargo la infraestructura de escala local y regional. Esta distribución de competencias se articula a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, que regula el ciclo de contratación -desde la planificación hasta la ejecución- e incorpora principios de transparencia, concurrencia y control.

De forma complementaria, el sector ha incorporado mecanismos de participación privada, como concesiones y Asociaciones Público-Privadas (APP), que permiten delegar al sector privado funciones de financiamiento, diseño, construcción y operación de infraestructura. Si bien su uso ha sido limitado, estos esquemas representan una alternativa relevante en contextos de restricción fiscal.

Desde el punto de vista normativo, la gestión de la infraestructura pública se sustenta en un marco jurídico amplio y jerarquizado que regula todo el ciclo de vida de los proyectos. La Constitución establece los principios generales de provisión de servicios públicos y control social; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su reglamento articulan la planificación con la asignación de recursos; la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP) y su reglamento regulan los procesos de contratación; y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) define las competencias de los GAD. A este marco se suman las normativas de Asociaciones Público-Privadas, las normas de control de la Contraloría General del Estado y las ordenanzas locales.

En este marco normativo, adquiere especial relevancia la reforma al COOTAD impulsada en 2026 por el gobierno de Daniel Noboa, la cual establece que los GAD deben destinar un porcentaje mínimo de su presupuesto a inversión en infraestructura y servicios básicos. La implementación de esta disposición es progresiva: a partir de 2027 se exige un mínimo del 60%, en 2028 el 65%, y desde 2029 el 70%, lo que configura una senda de ajuste gradual hacia una mayor orientación del gasto hacia inversión. Esta medida modifica los incentivos fiscales del nivel subnacional, reforzando el rol de los GAD como principales ejecutores de obra pública, aunque también plantea desafíos en términos de capacidad de gestión y calidad del gasto.

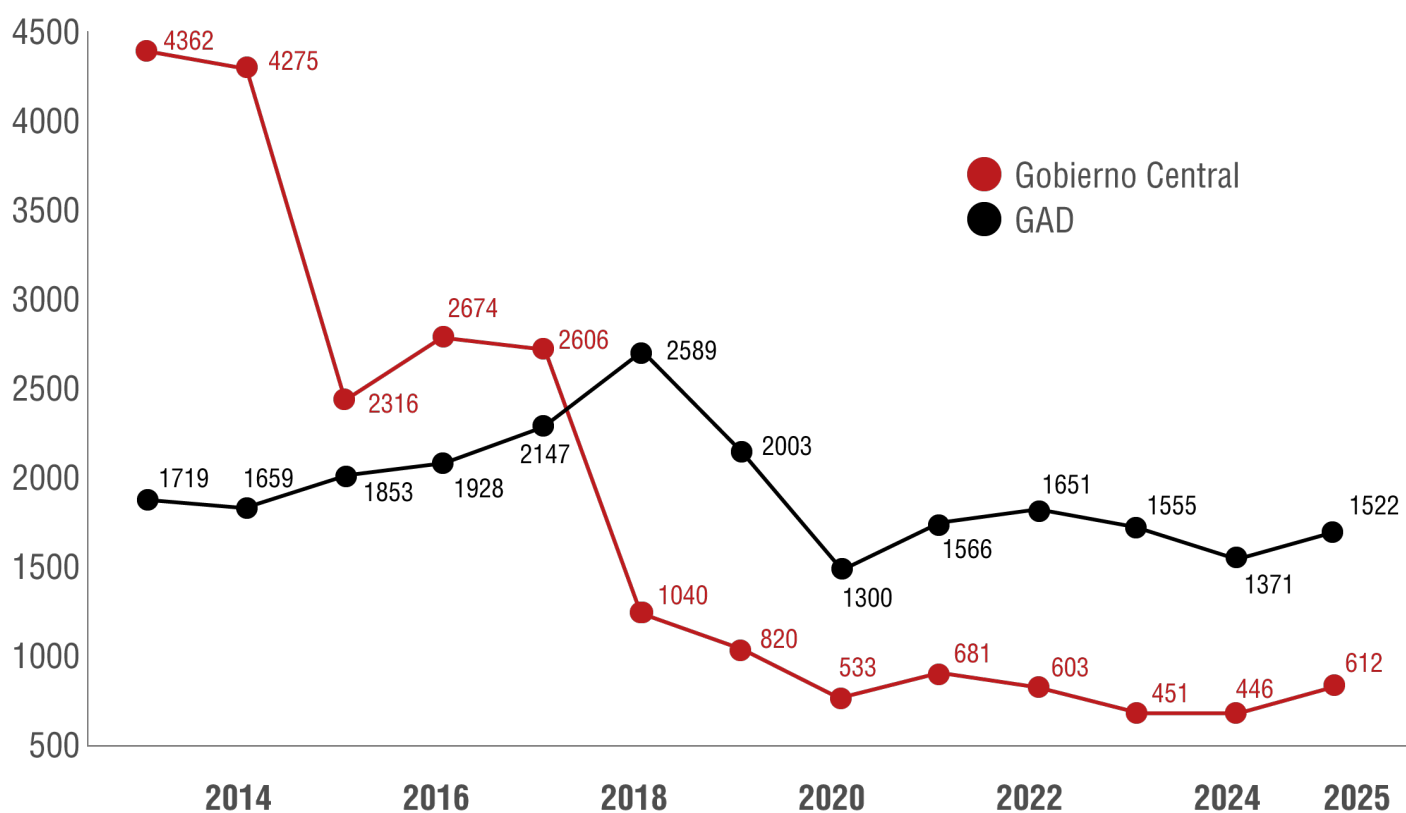
De igual forma, las reformas introducidas en octubre de 2025 a la LOSNCP marcan un cambio conceptual y operativo en la compra pública. En particular, se incorpora el principio de mejor valor por el dinero como eje transversal de todo el ciclo de contratación. Paralelamente, la reforma simplifica la contratación de obra pública al eliminar procedimientos como la menor cuantía y la cotización, concentrando la adjudicación principalmente en la licitación como mecanismo predominante, complementado únicamente por la ínfima cuantía para proyectos de bajo monto y el régimen especial. Es importante mencionar que la normativa de contratación pública en Ecuador se encuentra en constante evolución, con ajustes legales, reglamentarios y normativos frecuentes.

En este contexto, el análisis del sector puede abordarse a partir de los egresos en activos no financieros, que representan el gasto público destinado a la construcción de infraestructura y a la adquisición de bienes duraderos que se incorporan al patrimonio estatal. Este indicador constituye una medida directa de la inversión pública efectiva, y resulta particularmente útil para caracterizar el sector, en tanto permite observar la magnitud del gasto, su evolución en el tiempo y su distribución entre niveles de gobierno.

El análisis de los egresos en activos no financieros para el período 2013–2025 evidencia una contracción sostenida de la inversión pública en infraestructura. El gasto total se redujo de USD 6.081 millones en 2013 a USD 2.134 millones en 2025, lo que representa una caída superior al 60%, en un contexto marcado por restricciones fiscales y ajustes macroeconómicos¹.

1. Dado que la moneda de curso legal en Ecuador es el dólar de los Estados Unidos (USD), el análisis de inversión se realiza en esta moneda, sin requerir conversiones ni la aplicación de tipos de cambio

Evolución de los egresos en activos no financieros (2013-2025)



Este comportamiento no ha sido lineal. Entre 2013 y 2017 se evidencia una primera fase de reducción, seguida de una caída más pronunciada entre 2018 y 2020, período en el cual la inversión alcanza su punto más bajo (USD 1.833 millones en 2020), en un contexto asociado tanto a la consolidación fiscal y restricciones de financiamiento como a los efectos de la crisis sanitaria. A partir de 2021 se observa una leve recuperación, aunque sin retornar a los niveles históricos previos.

A nivel institucional, el análisis revela un cambio en la estructura de la inversión en la infraestructura pública. El Gobierno Central experimenta una reducción significativa, pasando de USD 4.362 millones en 2013 a USD 612 millones en 2025, lo que implica una contracción cercana al 86%. En contraste, los Gobiernos Autónomos Descentralizados muestran una mayor estabilidad en sus niveles de inversión. Aunque también se ven afectados por la contracción general, su gasto se mantiene en un rango entre USD 1.300 y 2.500 millones anuales, consolidando una participación creciente en el total.

● 1.4 Mecanismos de rendición de cuentas

En Ecuador, la rendición de cuentas en torno a los proyectos de infraestructura pública se sustenta en un conjunto de mecanismos institucionales, normativos y tecnológicos que buscan garantizar la transparencia, el control social y la supervisión del uso de recursos públicos a lo largo del ciclo de vida de los proyectos.

En primer lugar, destacan los **portales de transparencia nacional**² y los sitios web institucionales de las entidades públicas, a través de los cuales se publica información en cumplimiento de la normativa vigente, particularmente la LOTAIP. Estos espacios constituyen herramientas clave de transparencia activa, donde se difunden datos sobre planificación, presupuestos, contratación y ejecución de proyectos. Sin embargo, la calidad, estandarización y actualización de la información puede variar significativamente entre entidades.

Un segundo mecanismo relevante lo constituyen los **Informes Anuales de Rendición de Cuentas**³, mediante los cuales las instituciones públicas reportan su gestión a la ciudadanía. Estos informes suelen incluir información sobre el presupuesto, procesos de contratación, informes de contraloría, entre otros aspectos.

En el ámbito de la contratación pública, el **Sistema Oficial de Contratación del Estado**⁴ (SOCE), administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), constituye el principal repositorio de información sobre procesos de contratación. En esta plataforma se registran las distintas etapas del proceso contractual, desde la planificación hasta la ejecución y cierre, permitiendo el seguimiento de los proyectos de infraestructura.

2. <https://transparencia.dpe.gob.ec/>

3. <https://systempro.cpccs.gob.ec/rendicion/#%20>

4. <http://www.compraspublicas.gob.ec>



Seleccione u

Cantones

Buscar insti

2026

Complementariamente, el país ha avanzado en la implementación de estándares de datos abiertos a través de la **Plataforma de Contrataciones Abiertas Ecuador**⁵(OCDS), que adopta el estándar internacional Open Contracting Data Standard (OCDS). Esta herramienta permite acceder a datos estructurados, interoperables y reutilizables sobre contratación pública.

Por otro lado, la Contraloría General del Estado desempeña un rol fundamental en la rendición de cuentas a través de su **portal web**⁶, donde publica informes de auditoría, exámenes especiales y resultados de control relacionados con proyectos de infraestructura.

Finalmente, iniciativas como la de **CoST Ecuador**⁷ aportan un enfoque innovador basado en la transparencia, la revisión independiente y la participación multisectorial. A través de su plataforma, se promueve la divulgación estructurada de información sobre proyectos de infraestructura, así como el análisis técnico de datos y la generación de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

5. <https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/>

6. <https://www.contraloria.gob.ec/>

7. <https://costecuador.org/>

2. METODOLOGÍA DE REVISIÓN INDEPENDIENTE

La Revisión Independiente siguió un enfoque basado en cinco fases.

● Fase 1: Identificación y selección de proyectos

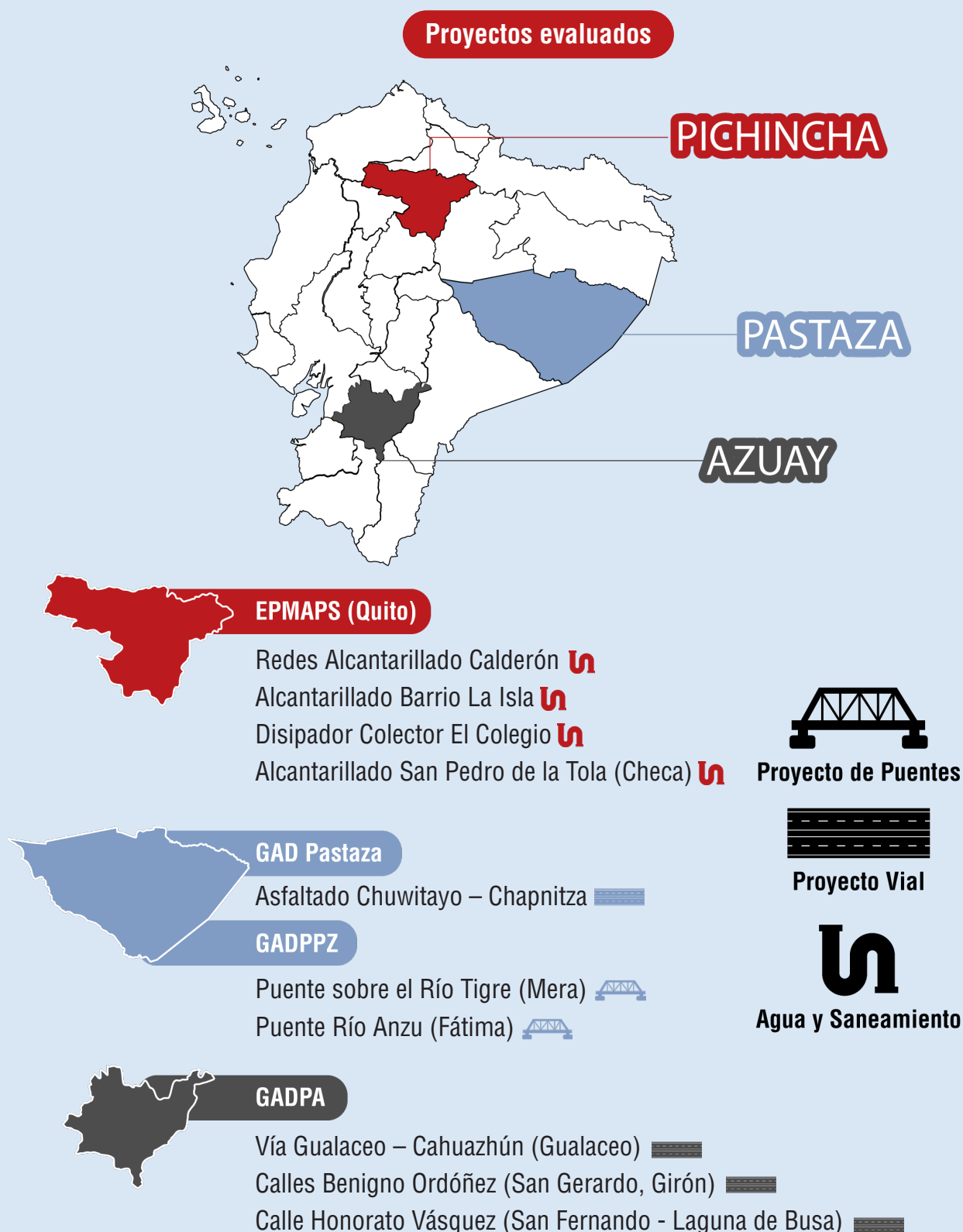
La identificación de la muestra de proyectos consideró los siguientes criterios:

1. **Sector:** Proyectos enfocados prioritariamente en agua y saneamiento.
2. **Tipo de procedimiento de contratación:** Prioritariamente proyectos adjudicados por licitación.
3. **Temporalidad:** Proyectos finalizados o en ejecución, a partir del año 2020.
4. **Voluntad política:** Entidades contratantes con apertura para la implementación de la Revisión Independiente.

Se estableció un universo inicial de 527 proyectos, identificado a partir del portal CoST Ecuador y correspondiente a las entidades que manifestaron interés (voluntad política) en participar en el proceso de revisión. De este universo, priorizando los criterios del sector, el tipo de procedimiento de contratación y la temporalidad se seleccionaron diez (10) proyectos de infraestructura, valorados en más de USD 13 millones en conjunto:

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza
 - Asfaltado del camino vecinal Chuwitayo–Chapintza desde la abscisa 4+000 hasta la comunidad de Kumay
 - Puente sobre el río Tigre en Mera
 - Puente sobre el río Anzu
- Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento - Agua de Quito
 - Construcción del Disipador de energía de la descarga del colector El Colegio
 - Alcantarillado barrio La Isla , parroquia Yaruquí.
 - Alcantarillado Checa – barrio San Pedro de la Tola.
 - Extensión de redes de alcantarillado para varios sectores de la administración Calderón.

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Azuay:
 - Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica Laguna de Busa del tramo vial calle Honorato Vásquez, en una longitud de 1,6 km, ubicado en el cantón San Fernando, provincia del Azuay.
 - Mejoramiento vial de las calles Benigno Ordóñez y Huasipungo, ubicadas en la parroquia San Gerardo, cantón Girón, provincia del Azuay.
 - Mejoramiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Gualaceo – Cahuazhún en una longitud de 7,15 km, cantón Gualaceo, provincia del Azuay.



● Fase 2: Levantamiento de información

En esta etapa, se revisó información de los proyectos en el Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE) y sitios web de las entidades para verificar qué datos se han publicado proactivamente. De igual forma, se realizaron solicitudes de información de datos faltantes o adicionales necesarios a las entidades para el análisis.

La recopilación de información se basó en el **Estándar de Datos de Infraestructura** (IDS) de CoST que define una lista de 67 puntos de datos que permiten monitorear la transparencia a lo largo del ciclo de vida del proyecto. El IDS clasifica en dos categorías a la información:

- Información proactiva: 40 Puntos de Datos.
- Información reactiva: 27 Puntos de Datos.

● Fase 3: Verificación In Situ

Se realizaron inspecciones físicas a los sitios de las obras, en los cuales se mantuvieron diálogos con representantes de las entidades contratantes y comunidades locales, con el fin de contrastar la información documental disponible con las condiciones observadas en campo de los 10 proyectos ubicados en Pastaza, Pichincha y Azuay.

En este sentido, el ejercicio se orientó a comparar lo esperado (según los informes, contratos y demás documentación disponible) con lo efectivamente observado en la ejecución de los proyectos, así como a identificar posibles brechas en la gestión, tanto en aspectos técnicos (avance físico, calidad de obra, cumplimiento de especificaciones) como en aspectos de gestión (coordinación, supervisión, cumplimiento de plazos y transparencia de la información).

● Fase 4: Análisis de información

En esta etapa, la información fue analizada mediante triangulación de fuentes, contrastando lo que dicen los documentos oficiales (contratos, planos, entre otros) con la realidad física observada en el terreno. Este análisis tuvo como objetivo identificar posibles diferencias entre lo planificado y lo ejecutado, confirmar el nivel de avance de los proyectos, detectar inconsistencias en la información reportada y validar la calidad y confiabilidad de los datos disponibles.

● Fase 5: Validación y elaboración del Informe

Antes de la publicación, los resultados fueron compartidos y discutidos con las entidades contratantes mediante reuniones de validación, con el fin de confirmar la precisión de los datos, contrastar hallazgos y recoger comentarios institucionales. Este proceso permitió además identificar oportunidades de mejora y aclarar posibles inconsistencias en la información analizada. Finalmente, se redactó este informe que comunica las conclusiones y recomendaciones.

Metodología de revisión independiente

FASE 1

IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROYECTOS

Sector:

Proyectos enfocados prioritariamente en agua y saneamiento.

Tipo de procedimiento:

Prioritariamente proyectos adjudicados por licitación.

Temporalidad:

Proyectos finalizados o en ejecución, a partir de 2020.

Voluntad política:

Entidades contratantes con apertura.

Proceso:

Muestra de 527 proyectos, seleccionados diez (10) proyectos (> USD 13M).

Entidades y proyectos:

-GAD Pastaza (3): Chuwitayo-Chapintza path, Puente río Tigre, Puente río Anzu.

-EPMAPS (4): Disipador El Colegio, Alcantarillado La Isla/San Pedro, Extensión redes Calderón.

-GAD Azuay (3): Mejoramiento Honorato Vásquez, Mejoramiento vial Benigno, Mejoramiento Gualaceo-Cahuazhun.

FASE 2

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



Revisión de información en SOCE y sitios web (proactiva).
Solicitudes de información (reactiva).

Web Proactiva:

SOCE/SERCOP. Reactiva: Solicitudes (oficio).

Estándar CoST IDS:

67 puntos clave de datos.

Categorías:

Proactiva (40 puntos), Reactiva (27 puntos).

FASE 3

VERIFICACIÓN IN SITU



Inspecciones físicas a obras, diálogos con supervisores y comunidades locales.

Proyectos:

Verificación de estado de los 10 proyectos en Pastaza, Pichincha (Quito) y Azuay.

FASE 4

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN



Triangulación de fuentes de información, contrastando documentos oficiales (contratos, planos) con la realidad física observada.

FASE 5

VALIDACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME



Discusión de resultados con entidades contratantes para precisión. Identificación de oportunidades de mejora.

Producto:

Redacción del informe final con conclusiones y recomendaciones.

3.EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

● 3.1 Resumen de los proyectos⁸

Asfaltado camino vecinal Chuwitayo – Chapintza

📍 **Ubicación:** Provincia de Pastaza, parroquia Simón Bolívar (Comunidad Kumay)

💰 **Inversión:** USD 2.919.451,07 ⚙️ **Sector:** Transporte

Este proyecto transformó la conectividad de la comunidad de Kumay, al intervenir 8 kilómetros de vía rural mediante un proceso que incluyó movimiento de tierras, conformación de base estabilizada y colocación de carpeta asfáltica. La obra es importante para la zona, reduciendo el tiempo de viaje hacia la principal ciudad de la provincia (Puyo) de dos horas a menos de 45 minutos, lo que garantiza acceso seguro de ambulancias y facilita la salida de productos agrícolas como plátano y yuca hacia los mercados.

Puente sobre el río Tigre

📍 **Ubicación:** Provincia de Pastaza, Cantón Mera

💰 **Inversión:** USD 499.606,56 ⚙️ **Sector:** Transporte

Este proyecto consistió en la construcción de una estructura de paso sobre el Río Tigre en el cantón Mera, tiene un ancho de 7,60 m, lo que permite albergar carriles para el flujo vehicular en ambos sentidos. (2 carriles). La obra permite el paso de vehículos pesados y livianos para la dinamización del turismo y la actividad agrícola de las comunidades que anteriormente dependían de un puente portátil prefabricado que con la última crecida del río dejó de existir.

8. En los anexos 1 y 2 se encuentran fichas resumen para cada uno de los proyectos y galería fotográfica

Puente sobre el río Anzu (Vía El Rosal)

📍 **Ubicación:** Provincia de Pastaza, Parroquia Fátima

💰 **Inversión:** USD 788.980,06 ⚙️ **Sector:** Transporte

La construcción de este puente carrozable definitivo sobre el Río Anzu 60 m de longitud surge como una solución urgente a los problemas de interconexión vial. La nueva infraestructura de doble carril con 6,0 metros de ancho responde al grave riesgo que representaba el puente colgante anterior, cuyas malas condiciones estructurales limitaban severamente la movilidad. Esta obra garantiza una conectividad segura para todo tipo de vehículos, facilitando el transporte ágil de la producción agrícola y ganadera de la zona. La mejora de este tramo vial reduce los costos de producción y asegura el flujo continuo de la economía local, elevando directamente la calidad de vida de los habitantes de las comunidades El Rosal y Simón Bolívar.

Disipador de energía colector El Colegio

📍 **Ubicación:** Norte de Quito

💰 **Inversión:** USD 2.246.846,12 ⚙️ **Sector:** Agua y saneamiento

Esta obra es un proyecto de ingeniería hidráulica subterránea diseñado para mitigar riesgos de desastres e inundaciones. El proyecto consistió en la construcción de una estructura de disipación de alta resistencia (tipo gradas) para reducir la fuerza cinética de las aguas lluvias antes de su descarga, evitando la erosión regresiva de la quebrada. La obra protege la estabilidad de viviendas y vías ubicadas en zona de riesgo.

Alcantarillado barrio La Isla (Yaruquí)

📍 Ubicación: Quito, Parroquia Rural Yaruquí

💰 Inversión: USD 1.474.414,04 ⚙️ Sector: Agua y saneamiento

El proyecto desarrolló un sistema separativo de alcantarillado sanitario mediante la instalación de 15 kilómetros de tubería PVC y la construcción de pozos de revisión. Su ejecución mitigó la dependencia de pozos sépticos colapsados en zonas rurales de Quito.

Alcantarillado Checa- San Pedro de la Tola

📍 Ubicación: Quito, Parroquia Rural Checa

💰 Inversión: USD 1.126.186,92 ⚙️ Sector: Agua y saneamiento

Este proyecto consistió en la construcción de redes terciarias y colectores secundarios para la recolección segura de aguas servidas en un terreno de topografía irregular. La obra evita las descargas directas de aguas negras a las quebradas de la parroquia Checa.

Extensión redes de alcantarillado Calderón

📍 Ubicación: Quito, Parroquia Calderón (Urbano)

💰 Inversión: USD 1.388.582,43 ⚙️ Sector: Agua y saneamiento

Esta obra amplió la cobertura de alcantarillado en barrios consolidados del norte de Quito, mediante trabajos complementarios de rotura y reposición de pavimento en vías de alto tráfico. El proyecto atiende el crecimiento demográfico de la zona, dotando de servicios a nuevos asentamientos y mitigando el riesgo de inundaciones urbanas.

Asfaltado Vía Gualaceo – Cahuazhún

📍 **Ubicación:** Provincia de Azuay, Cantón Gualaceo

💰 **Inversión:** USD 2.971.698,81 ⚙️ **Sector:** Transporte

La obra fue la rehabilitación integral de una vía conectora en la provincia, mediante la colocación de carpeta asfáltica y el mejoramiento del sistema de drenaje. La obra fomenta actividades de turismo y comerciales, facilitando la conexión a una red vial estatal y mejorando la seguridad vial para el tráfico intercantonal.

Mejoramiento carpeta asfáltica Laguna de Busa – calle Honorato Vásquez

📍 **Ubicación:** Provincia de Azuay, Cantón Santa Isabel

💰 **Inversión:** USD 273.088,08 ⚙️ **Sector:** Transporte

Esta obra implicó la pavimentación y construcción de aceras y bordillos en Santa Isabel. El proyecto tuvo alto impacto para la calidad de vida de los moradores, dinamizando el comercio local gracias a una mejor accesibilidad peatonal y vehicular.

Mejoramiento calles Benigno Ordóñez

📍 **Ubicación:** Provincia de Azuay, Parroquia San Gerardo (Girón)

💰 **Inversión:** USD 110.893,53 ⚙️ **Sector:** Transporte

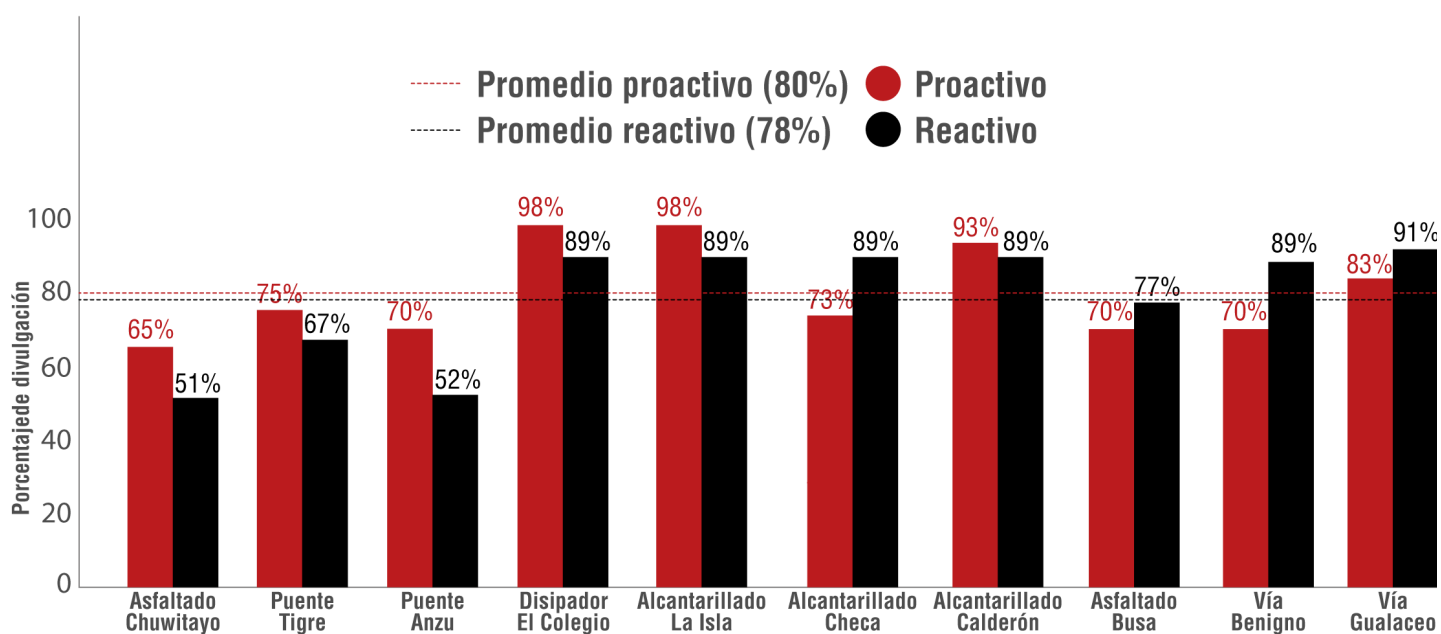
Este proyecto se enfocó en el bacheo y recarpeteo de calles deterioradas, mejorando la accesibilidad al centro parroquial de San Gerardo. La intervención facilita el acceso de la población a servicios esenciales como la iglesia, la escuela y la casa comunal, respondiendo a la necesidad de movilidad local.

● 3.2 Nivel de divulgación de la información

El análisis del nivel de divulgación de la información en los proyectos evaluados evidencia un desempeño general medio-alto, con un promedio de 80% en divulgación proactiva y 78% en divulgación reactiva. Estos resultados reflejan avances importantes en la disponibilidad de información, aunque con brechas persistentes en fases críticas del ciclo del proyecto.

A nivel de proyectos, se observa que el Disipador El Colegio y alcantarillado la Isla alcanzan niveles sobresalientes tanto en divulgación proactiva (98%) como reactiva (89%), evidenciando una alta alineación con el estándar IDS. En contraste, proyectos como el asfaltado Chuwitayo–Chapintza (65% proactivo; 51% reactivo) y el puente río Anzu (70% proactivo; 52% reactivo) presentan niveles menores, particularmente en el acceso a información bajo solicitud.

Divulgación proactiva y reactiva por proyecto





El análisis por fases en modalidad proactiva permite identificar patrones estructurales relevantes en el proyecto y gestión contractual:

Fase de identificación (nivel proyecto): alcanza un nivel de divulgación del 100% en promedio, evidenciando un cumplimiento generalizado en la publicación de información básica del proyecto, como nombre, ubicación, propósito y presupuesto.

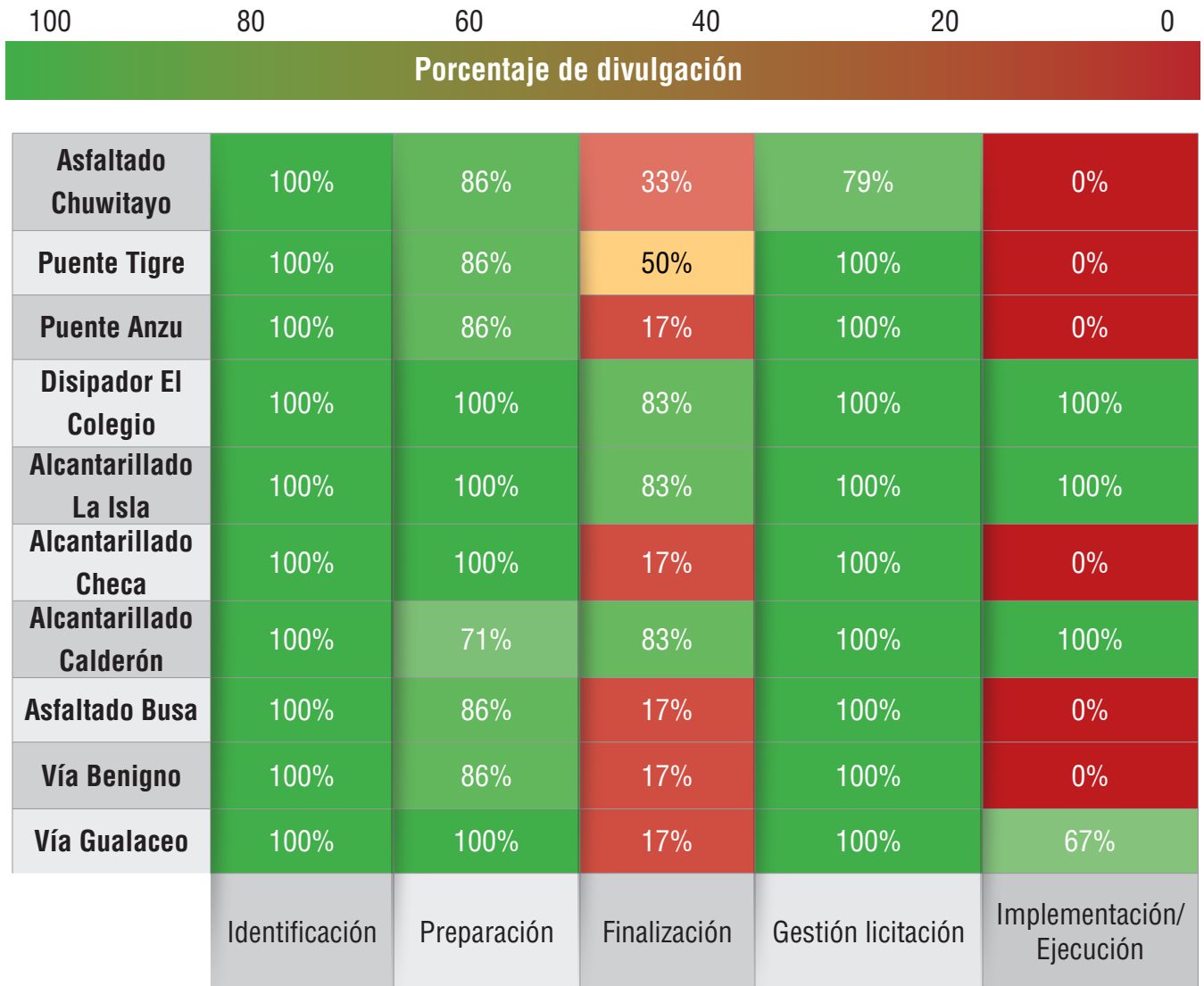
Fase de preparación (nivel proyecto): presenta un nivel alto (90%), lo que refleja una adecuada disponibilidad de información sobre estudios, financiamiento y estructuración del proyecto.

Fase de finalización (nivel proyecto): muestra una caída significativa (42%), evidenciando limitaciones en la publicación de información relacionada con el cierre del proyecto, incluyendo resultados, cumplimiento de objetivos y evaluaciones finales.

Fase de gestión de licitación (nivel contrato): mantiene un nivel elevado (98%), lo que indica que la información sobre procesos de contratación es ampliamente publicada de forma activa.

Fase de implementación (nivel contrato): constituye la principal oportunidad de mejora, con 37% de divulgación proactiva, lo que evidencia una baja disponibilidad de información pública durante la ejecución, como avances físicos y financieros, modificaciones contractuales, pagos y control de calidad.

Mapa de calor divulgación proactiva por fase y proyecto



Fases del proyecto y contrato

Promedio de fases a nivel proyecto			Promedio de fases a nivel contrato	
Identificación	Preparación	Finalización	Licitación	Implementación
100%	90%	42%	98%	37%

No obstante, a pesar de la disponibilidad de información en modalidad proactiva, se identifican limitaciones relacionadas con la calidad del formato de los datos. En varios casos, la información se encuentra publicada en formatos no legibles por máquina (por ejemplo, documentos escaneados o PDFs no estructurados), lo que restringe su reutilización, análisis automatizado y vinculación con otros sistemas de información. Esta situación limita el potencial del estándar CoST en términos de apertura de datos y uso para análisis avanzados.

A nivel cualitativo, se identifican además patrones recurrentes en las brechas de divulgación proactiva:

- | Ausencia de información sobre variaciones contractuales, incluyendo cambios en precio, plazo y alcance, así como sus respectivas justificaciones.
- | Limitada disponibilidad de información ambiental y social, frecuentemente restringida a códigos de licencia sin respaldo documental (estudios o planes de manejo ambiental).
- | Falta de referencias a auditorías técnicas y financieras, pese a ser un requerimiento del estándar CoST.
- | Falta de publicación de información en etapas de ejecución, particularmente planillas de obra, registros de pagos, informes de avance y control de calidad.
- | Se identificó que se utiliza el código del proceso de contratación como identificador del proyecto, lo que implica una equivalencia conceptual entre contrato y proyecto. Esta práctica limita la trazabilidad del ciclo de vida de la infraestructura y dificulta la identificación de intervenciones integrales que podrían estar siendo ejecutadas mediante múltiples procesos.

En la modalidad reactiva, el comportamiento por fases presenta algunas diferencias relevantes:

Fase de identificación y preparación (nivel proyecto): alcanza un promedio de 80%, evidenciando que es posible acceder a una parte importante de la información inicial del proyecto.

Fase de finalización (nivel proyecto): presenta un nivel de 52%, lo que confirma que incluso bajo mecanismos de acceso a la información, persisten brechas importantes en la disponibilidad de datos sobre cierre y evaluación de proyectos.

Fase de gestión de licitación (nivel contrato): alcanza el 100%, reflejando una alta disponibilidad de información asociada a procesos precontractuales, esto principalmente porque la información se encuentra disponible en el SOCE.

Fase de contratación (nivel contrato): presenta un nivel de 99%, lo que evidencia una cobertura prácticamente completa de la información contractual, fomentado por la información divulgada de forma proactiva en el SOCE.

Fase de implementación/ejecución (nivel contrato): alcanza un 73%, superior al nivel proactivo, lo que indica que una parte importante de la información de ejecución existe, pero no se publica de manera sistemática, dependiendo de solicitudes específicas para su acceso.

Este comportamiento sugiere que, si bien la información está disponible en muchos casos, no se encuentra plenamente integrada en esquemas de transparencia activa, generando barreras de acceso y mayores costos de obtención para los usuarios.

A nivel cualitativo, se identifican patrones recurrentes en las brechas de divulgación reactiva, destacando la ausencia de informes de auditoría técnica y financiera, planes plurianuales y documentos de cierre o evaluación de resultados en todas las entidades. Existe también falta de información sobre la gestión de impactos sociales y ambientales (planes de reasentamiento y estudios detallados), así como de registros de la etapa de ejecución, tales como certificados de pago, informes de control de calidad con ensayos de laboratorio, y sustentos técnicos para variaciones en precio o plazo.

Finalmente, es importante mencionar que se evidencian limitaciones en la oportunidad de entrega de información bajo solicitud, con tiempos de respuesta que oscilan entre 24 y 78 días, superando el tiempo establecido en la LOTAIP de máximo 15 días plazo (calendario).

Mapa de calor divulgación reactiva por fase y proyecto

	100	80	60	40	20	0
	Porcentaje de divulgación					
Asfaltado Chuwitayo	71%	0%	100%	100%	0%	
Puente Tigre	67%	50%	100%	89%	40%	
Puente Anzu	67%	11%	93%	100%	7%	
Disipador El Colegio	88%	67%	100%	100%	100%	
Alcantarillado La Isla	88%	67%	100%	100%	100%	
Alcantarillado Checa	88%	67%	100%	100%	100%	
Alcantarillado Calderón	88%	67%	100%	100%	100%	
Asfaltado Busa	79%	33%	100%	100%	87%	
Vía Benigno	83%	67%	100%	100%	100%	
Vía Gualaceo	79%	89%	100%	100%	100%	
	Identificación y preparación	Finalización	Gestión licitación	Contratación	Implementación/Ejecución	

Fases del proyecto y contrato

Promedio reactivo: fases a nivel proyecto		Promedio reactivo: fases a nivel contrato		
% Identificación y preparación	% Finalización	% Gestión licitación	% Contratación	% Implementación/Ejecución
80%	52%	100%	99%	73%

● 3.3 Nivel de precisión de los datos

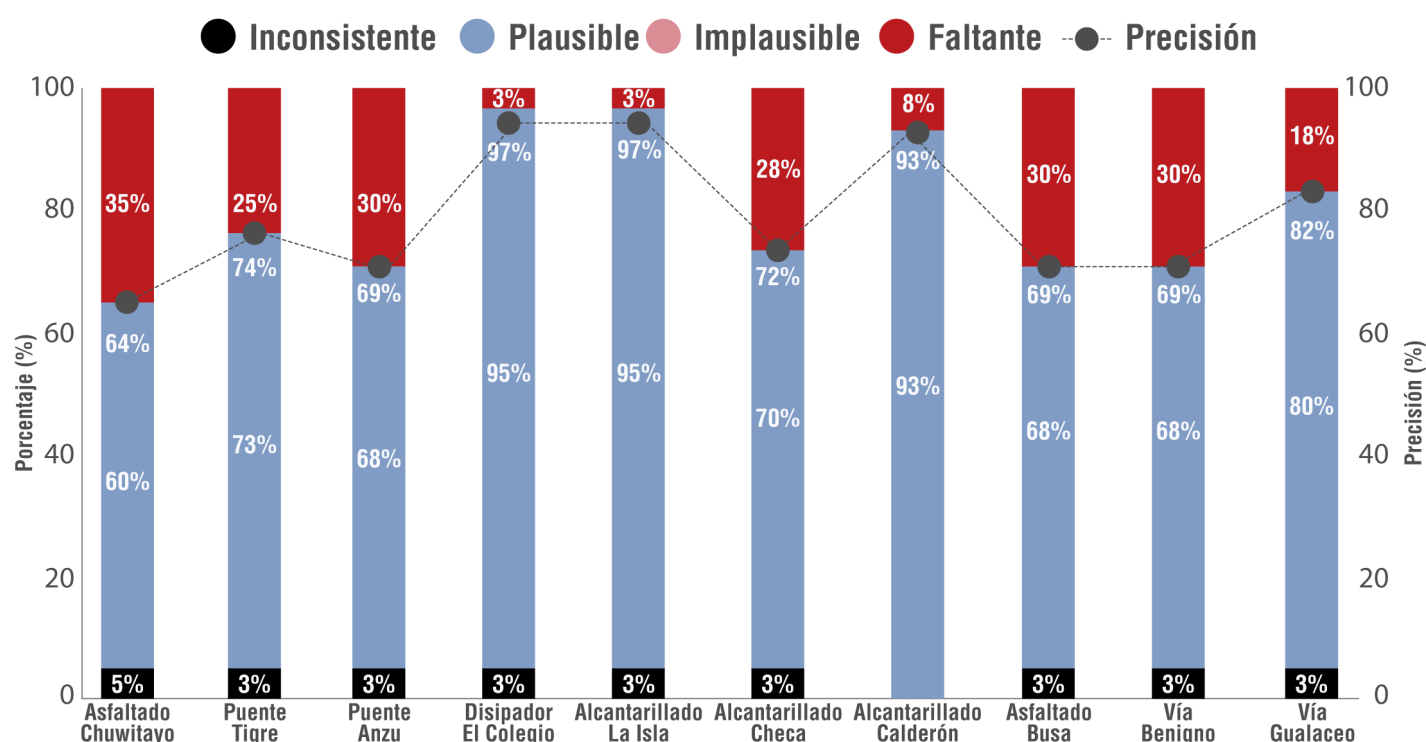
En el marco de la revisión independiente de infraestructura de CoST, la transparencia no se mide únicamente por el volumen de documentos disponibles (cantidad), sino por la confiabilidad, veracidad y exactitud de dichos datos (calidad).

Esta sección evalúa la precisión de la información de los 10 proyectos de la muestra. El análisis revela un nivel general aceptable, con un promedio de 79% de precisión, aunque con variaciones entre proyectos y una proporción relevante de información faltante.

En términos agregados, el 77% de los datos evaluados son plausibles (es decir, coherentes, consistentes y respaldados documentalmente e información), mientras que menos del 3% presenta inconsistencias (discrepancias entre fuentes o registros), y no se identificaron datos clasificados como implausibles (contradicciones evidentes o información sin sustento verificable). Sin embargo, el 21% de la información corresponde a datos faltantes (información no disponible o no divulgada), lo que constituye la principal limitación para garantizar la calidad y confiabilidad de la información disponible. Esta ausencia de información restringe la capacidad de verificar de manera integral el avance físico y financiero de los proyectos, limita el seguimiento de modificaciones contractuales y dificulta la validación de los resultados finales, afectando así la trazabilidad y el control efectivo de la ejecución.

En esa línea, los problemas de precisión no están asociados principalmente a la existencia de datos incorrectos, sino a la incompletitud de la información. La baja proporción de datos inconsistentes y la ausencia de datos implausibles sugieren que, cuando la información está disponible, tiende a ser confiable.

Evaluación de la precisión de los datos



Desde una perspectiva cualitativa, las principales debilidades en la precisión de los datos se relacionan con:

- Falta de información sobre ejecución y cierre, lo que impide validar coherencia entre planificación y resultados.
- Ausencia de datos sobre modificaciones contractuales, dificultando el seguimiento de desviaciones en costo, plazo y alcance.
- Débil documentación de evaluaciones y auditorías, lo que restringe la verificación independiente de resultados

Asimismo, se identificaron casos de información parcialmente consistente, particularmente en temas ambientales, donde se reportan códigos o referencias ambientales sin documentación de respaldo, lo que reduce la verificabilidad de los datos.

Finalmente, se identificaron problemas de actualización de la información en el SOCE, donde proyectos que presentan avances físicos significativos e incluso han sido concluidos continúan registrados en fases previas (Alcantarillado Checa, Puente Tigre, Asfaltado Chuwitayo, vía Gualaceo, vía Benigno y Asfaltado Busa). Esta desalineación entre el estado real del proyecto y su registro en el sistema oficial afecta la confiabilidad de la información pública y restringe la capacidad de verificar de manera integral el avance físico y financiero de los proyectos.

Proyecto registrado en etapa de adjudicación en el SOCE



● 3.4 Análisis del desempeño de los proyectos

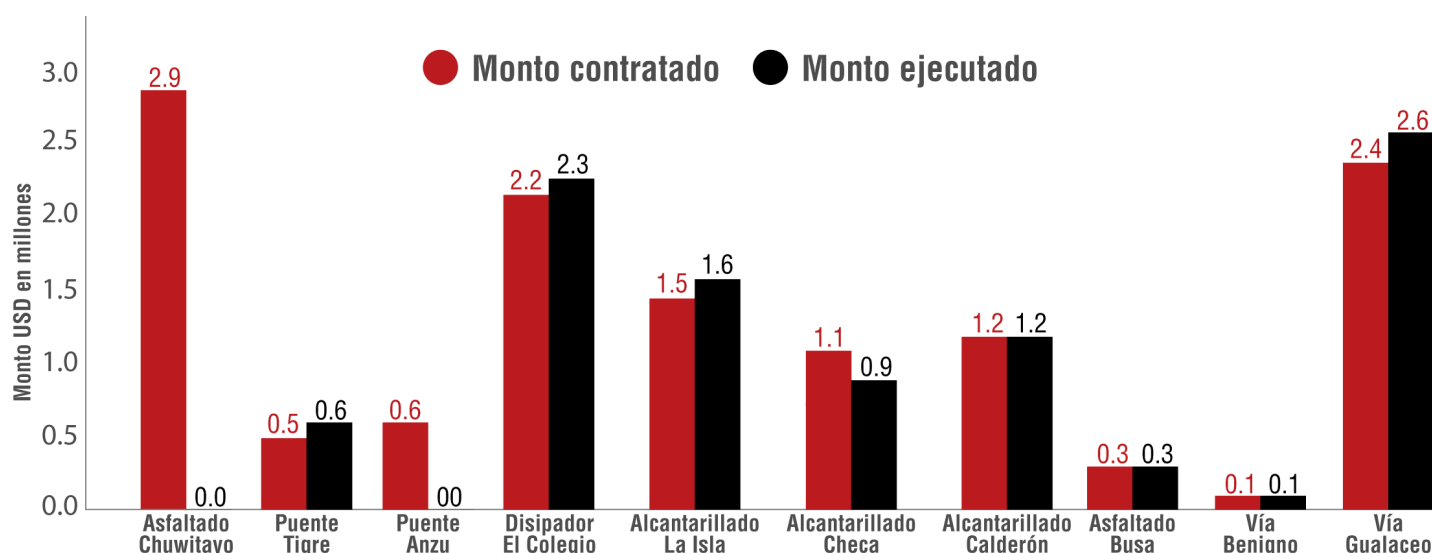
Entidad Contratante	Código	Proyecto (Nombre Corto)	Sector	Número oferentes	Monto Contratado (USD)	Plazo Inicial	Desviación Costo (%)	Desviación Tiempo (%)	Estado Físico	Fuente de financiamiento
EPMAPS	LICO-EPMAPS-11-2022	Disipador Colector El Colegio	Agua y saneamiento	2	2.168.716,29	360 días	+ 4.3%	0.0%	Terminado	Local
EPMAPS	LICO-EPMAPS-13-2022	Alcantarillado Barrio La Isla	Agua y saneamiento	15	1.474.414,04	540 días	+ 10.0%	- 13.0%	Terminado	Local
EPMAPS	LICO-EPMAPS-12-2022	Alcantarillado S. Pedro de la Tola	Agua y saneamiento	16	1.126.186,92	240 días	- 21.7%	- 1.3%	Terminado	Local
EPMAPS	LICO-EPMAPS-02-2022	Redes Alcantarillado Calderón	Agua y saneamiento	17	1.225.270,00	360 días	- 0.6%	- 0.3%	Terminado	Local
GAD Pastaza	LICO-GADPPZ-2024-002	Asfaltado Chuwitayo – Chapintza	Transporte	18	2.919.451,07	730 días	N/D	N/D	En Ejecución	Local
GAD Pastaza	COTO-GADPPZ-2024-001	Puente sobre el Río Tigre (Mera)	Transporte	7	499.606,56	300 días	+ 12.0%	+ 0.3%	Terminado	Local
GAD Pastaza	COTO-GADPPZ-2024-003	Puente sobre el Río Anzu	Transporte	12	595.668,77	210 días	0.00 %	+ 28.57 %	En Ejecución (Estado Físico 77.17 %)	Local
GAD Azuay	LICO-GPA-003-2022	Carpeta asfáltica vía Gualaceo – Cahuazhún	Transporte	16	2.372.423,20	150 días	+ 9.3%	+ 21.3%	Terminado	Local
GAD Azuay	RE-CEP-GADGPA-2024-003	Carpeta asfáltica Laguna de Busa Calle H. Vásquez (San Fernando)	Transporte	1	269.724,00	90 días	0.0%	- 3.3%	Terminado	Local
GAD Azuay	MCO-GADGPA-2024-005	Mejoramiento vial Benigno Ordóñez (San Gerardo)	Transporte	10	110.893,53	35 días	- 2.4%	+ 77.1%	Terminado	Local

3.4.1 Análisis de los costos de los proyectos

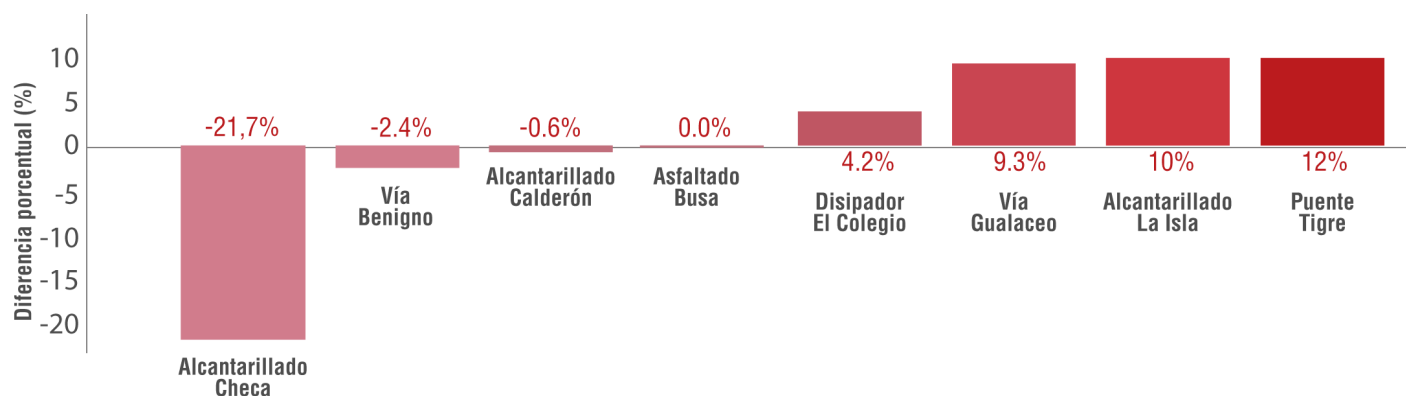
El análisis del monto contratado inicial frente al monto final ejecutado permite evaluar el comportamiento financiero de los proyectos, particularmente en términos de desviaciones y eficiencia en la ejecución. El monto contratado corresponde al valor original del contrato, previo a la aplicación de órdenes de cambio, contratos complementarios u otras modificaciones contractuales.

A nivel general, se identifican variaciones entre los proyectos, con incrementos de hasta 12,02% y reducciones de hasta -21,73%.

Monto contratado y monto final ejecutado



Variación entre el monto contratado y el monto final ejecutado



La información disponible permite identificar las causas específicas de las variaciones contractuales. Los proyectos con incrementos presentan diversas fuentes de variación:

Puente Tigre: el incremento se explica principalmente por un contrato complementario (USD 34.746,61), acompañado de reajustes por fórmula polinómica del contrato principal (USD 345,16) y del contrato complementario (USD 312,72), además de otros ajustes adicionales (USD 24.654,01). En conjunto, estos elementos reflejan una ampliación del alcance y actualización de costos durante la ejecución.

Alcantarillado La Isla: registra una combinación de órdenes de trabajo (USD 28.893,78), órdenes de cambio (USD 73.627,27) y reajustes por fórmula polinómica (USD 44.338,50), evidenciando múltiples mecanismos de modificación contractual. Adicionalmente, se observan ajustes menores asociados a cambio de alcance (-USD 48,61), sin alterar la tendencia general de incremento.

Disipador El Colegio: el incremento se explica principalmente por reajustes mediante fórmula polinómica del contrato principal (USD 93.023,60), con un ajuste marginal por cambio de alcance (-USD 785,31), lo que sugiere que la variación responde esencialmente a actualización de precios.

Vía Gualaceo: presenta una de las variaciones más relevantes, explicada por órdenes de trabajo (USD 46.388,95), reajustes por fórmula polinómica (USD 42.939,26) y un ajuste por cambio de alcance (USD 118.561,06), lo que evidencia una expansión significativa del alcance contractual además de ajustes económicos.

En estos casos, los reajustes asociados a fórmula polinómica constituyen un componente relevante de las variaciones, al reflejar ajustes derivados de la evolución de los costos de insumos, mano de obra y equipos durante la ejecución. Este mecanismo, previsto contractualmente en obras públicas, permite actualizar los valores sin modificar el alcance técnico, manteniendo el equilibrio económico del contrato frente a cambios en las condiciones del mercado⁹.

9. La fórmula polinómica en la práctica, se activa en situaciones como incrementos en materiales estratégicos (acero, cemento, combustibles), ajustes en salarios de mano de obra, cambios en costos de equipos o contextos inflacionarios. Metodológicamente, la fórmula polinómica consiste en una expresión matemática que descompone el costo total de la obra en sus principales componentes (mano de obra, materiales, equipos, transporte, entre otros), asignándoles coeficientes que representan su peso relativo dentro del presupuesto. Estos coeficientes se multiplican por índices oficiales de precios (como los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos en los índices IPCO), comparando el valor base contractual con el valor actualizado al momento de ejecución. El resultado es un factor de ajuste que se aplica al monto de la planilla, permitiendo actualizar el precio.

No obstante, la concurrencia de múltiples mecanismos de modificación en un mismo proyecto, incluyendo órdenes de trabajo, órdenes de cambio y contratos complementarios, puede ser indicativa de limitaciones en la estimación inicial de costos o en la definición del alcance, lo que reduce la predictibilidad en la ejecución contractual.

En cambio, los proyectos que presentan reducciones en el monto ejecutado son: Alcantarillado Checa: presenta un reajuste positivo menor por fórmula polinómica (USD 2.250,50), pero un ajuste negativo mucho mayor por cambio de alcance (-USD 246.952,28), lo que determina una reducción neta importante del contrato.

Alcantarillado Calderón: muestra un reajuste negativo por fórmula polinómica (-USD 7.009,17) y un ajuste marginal adicional por cambio de alcance (-USD 20,04), reflejando una contracción leve del monto contractual.

Vía Benigno: incluye un contrato complementario (USD 7.433,99) y un reajuste por fórmula polinómica (USD 218,15), compensados por un ajuste negativo por cambio de alcance (-USD 10.267,16), lo que resulta en una reducción neta del contrato.

Asfaltado Busa: presenta un contrato complementario (USD 18.880,68) que es completamente compensado por un ajuste negativo equivalente (-USD 18.880,68), lo que sugiere una reconfiguración interna del contrato sin variación neta final.

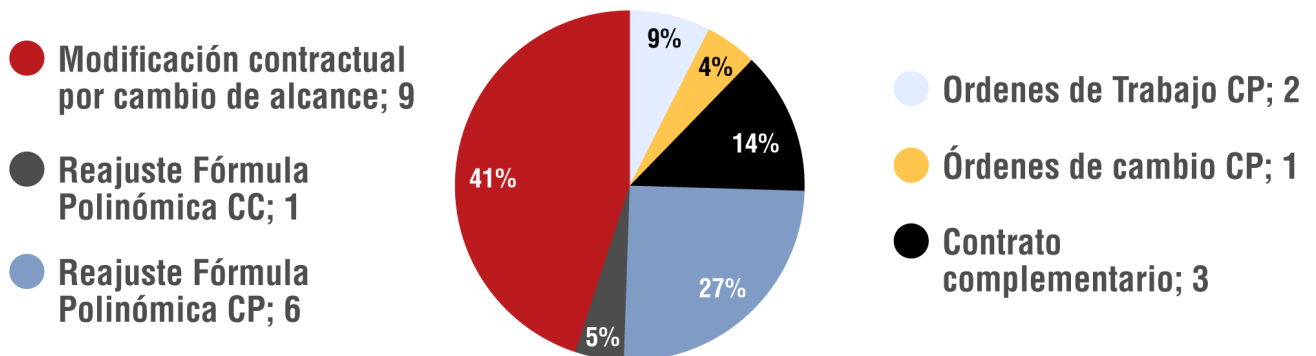
Finalmente, el proyecto de asfaltado Chuwitayo–Chapintza y Puente sobre el río Anzu están en ejecución y no presentan información sobre desviaciones.

En conjunto, los resultados muestran que las reducciones contractuales están predominantemente asociadas a ajustes por cambio de alcance, mientras que los incrementos se explican principalmente por la combinación de órdenes de trabajo, órdenes de cambio y reajustes por fórmula polinómica.

Causas de las variaciones del monto contractual por proyecto

	200.000	150.000	100.000	50.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
	Monto modificación (USD)								
Puente Tigre	24.654,01					34.746,61	345,16	312,72	
Disipador El Colegio	-783,31						93.023,60		
Alcantarillado ILa isla	-48,61	28.893,78	73.627,27				44.338,50		
Alcantarillado Checa	-246.952,28						2.250,50		
Alcantarillado Calderón	-20,04						-7.009,17		
Asfaltado Busa	-18.880,68					18.886,68			
Vía Benigno	-10.267,16					7.433,99	218,15		
Vía Gualaceo	118.561,06	46.388,95					42.939,26		
	Modificación contractual por cambio de alcance	Órdenes de trabajo CP	Órdenes de cambio CP			Contrato complementario	Reajuste fórmula polinómica CP	Reajuste fórmula polinómica CC	

Causas de las variaciones del monto contractual



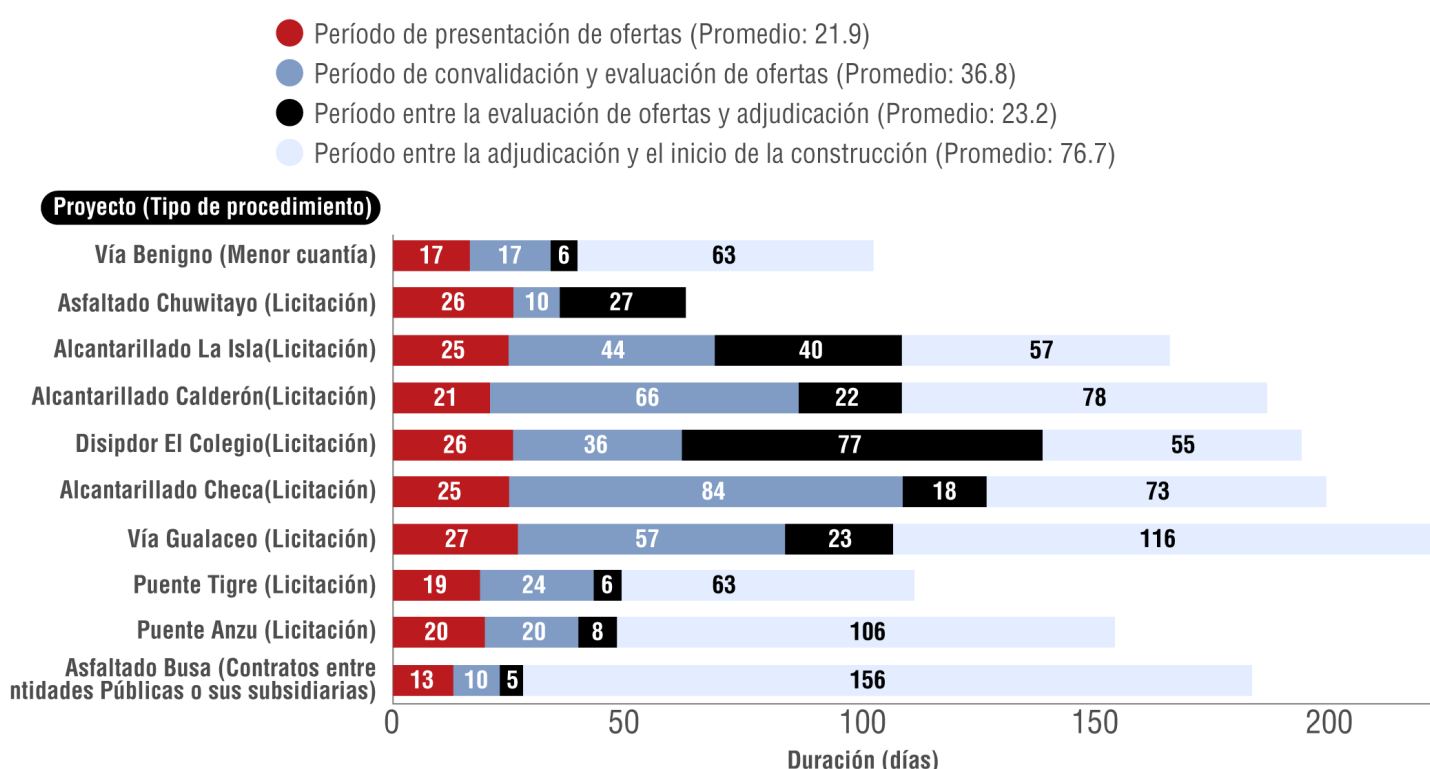
3.4.2 Análisis temporal de los proyectos

El análisis de los tiempos en las distintas etapas del proceso de contratación y ejecución permite evaluar la eficiencia operativa de los proyectos, así como identificar posibles cuellos de botella en la transición entre fases clave.

Es importante mencionar que el análisis de los 10 proyectos considera cuatro tipos de procedimientos de contratación: (i) menor cuantía, donde se requiere únicamente la presentación de formularios estandarizados conforme a la LOSNCP, con adhesión al presupuesto referencial; (ii) cotización, que incorpora adicionalmente una oferta económica por parte del contratista, la cual puede presentar variaciones respecto al presupuesto referencial; (iii) licitación, que incluye tanto la oferta económica como el análisis de desagregación tecnológica (VAE); y (iv) contratos entre entidades públicas, en los cuales la empresa pública analiza y se adhiere a la propuesta de la entidad contratante. Esta diferenciación es relevante para el análisis temporal, ya que cada tipo de procedimiento implica distintos niveles de complejidad y requisitos, lo que incide directamente en la duración de los procesos y explica parte de las variaciones observadas entre proyectos.

A nivel general, los datos muestran una alta variabilidad en los tiempos, particularmente en las etapas posteriores a la evaluación de ofertas.

Periodo de licitación hasta el inicio de la construcción



El análisis por etapas muestra los siguientes patrones:

Período entre la publicación y la recepción de ofertas: El tiempo promedio para la recepción de ofertas es de 21,9 días, con variaciones moderadas entre proyectos.

En general, esta fase presenta comportamientos relativamente homogéneos, lo que sugiere una aplicación consistente de los plazos establecidos para la convocatoria y recepción de propuestas.

Período de convalidación y evaluación de ofertas: Esta fase presenta un promedio de 36,8 días, los proyectos de alcantarillado Checa (84 días), alcantarillado Calderón (66 días), carpeta asfáltica Gualaceo (57 días) son los que presentan valores más altos. Estos mayores plazos se explican principalmente porque dichos proyectos se gestionaron bajo el procedimiento de licitación, el cual, por su naturaleza, exige la presentación y evaluación de documentación más compleja en comparación con otros procedimientos como menor cuantía, cotización y contratos entre entidades públicas.

Período entre el fin de la evaluación de ofertas y la adjudicación: El tiempo promedio en esta fase es de 23,2 días, con un valor alto en el proyecto Disipador El Colegio (77 días).

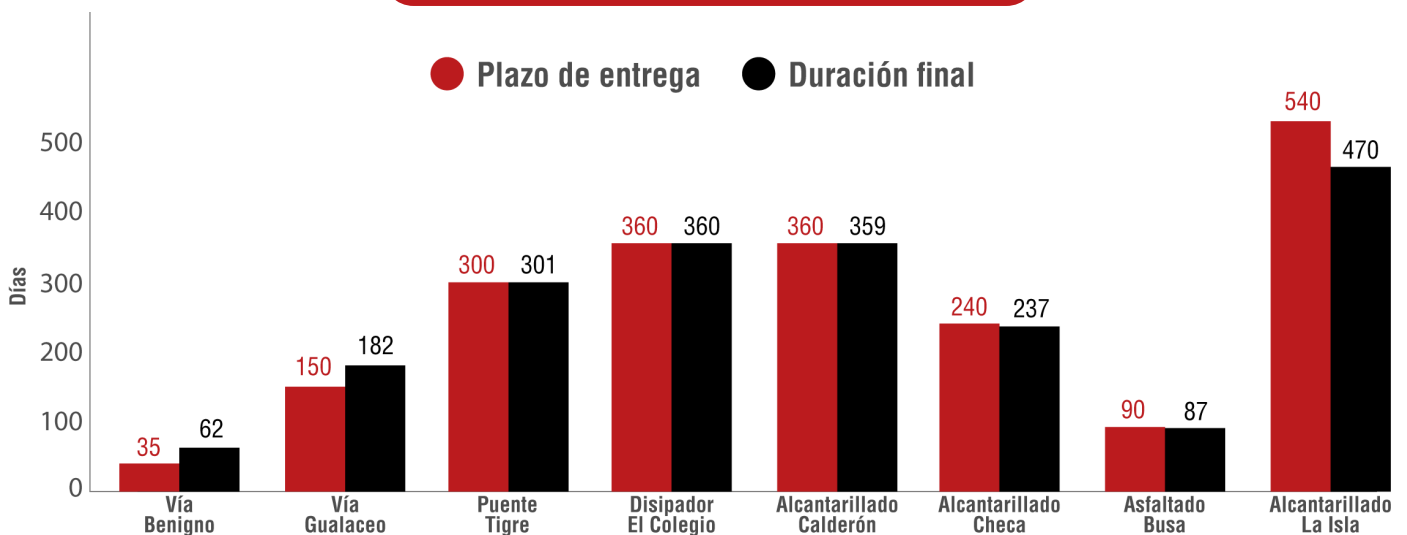
La mayoría de proyectos presentan tiempos relativamente acotados, sin embargo, el caso del Disipador El Colegio destaca como un valor significativamente superior al promedio, causado específicamente por un procedimiento de impugnación al acta de evaluación de ofertas.

Período entre la adjudicación y el inicio de la construcción: Los valores más altos se observan en los proyectos carpeta asfáltica Laguna de Busa (156 días), carpeta asfáltica Gualaceo (116 días), y se debió a que el Gobierno Provincial de Azuay era responsable de la conformación de la estructura vial, y sólo al culminar esta fase se puede proceder con el inicio de la construcción de la carpeta asfáltica por parte del contratista adjudicado.

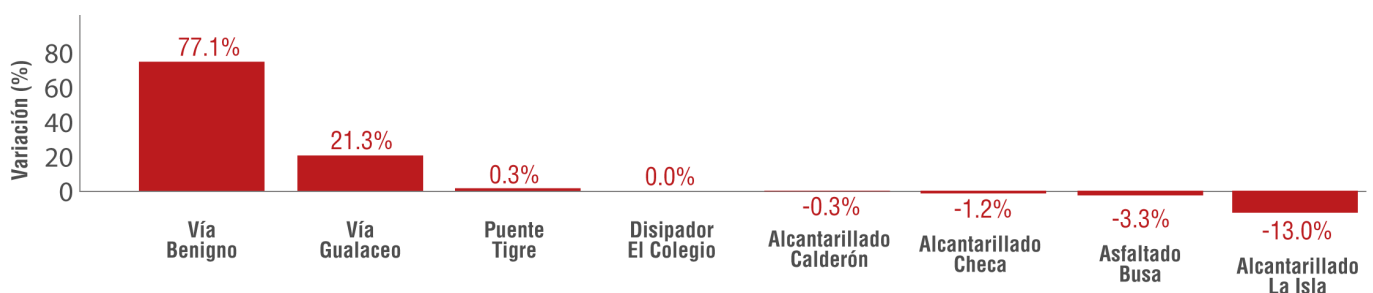
Como complemento al análisis de los tiempos en las etapas precontractuales y de inicio de obra, resulta fundamental examinar el comportamiento del plazo de ejecución de los proyectos, así como las desviaciones respecto a la planificación inicial. Este análisis permite evaluar no solo la eficiencia en la gestión temporal durante la fase constructiva, sino también la capacidad de adaptación frente a cambios ocurridos durante la ejecución.

En este contexto, los resultados evidencian desviaciones de tiempo, con proyectos que cumplen estrictamente los plazos establecidos, otros que presentan reducciones moderadas y algunos con incrementos significativos en la duración de ejecución, lo que refleja diferencias en la gestión y control del tiempo entre proyectos.

Plazo de ejecución y desviación de tiempo



Variación porcentual entre plazo y duración final



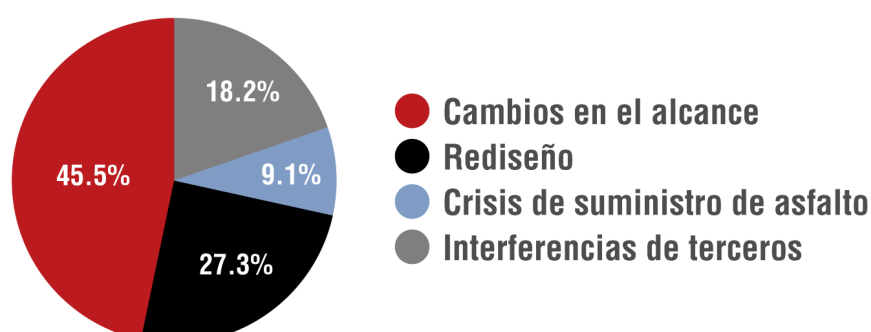
Se identifican varios proyectos con desviaciones negativas, es decir, que finalizaron en un plazo menor al inicialmente previsto: Alcantarillado la Isla (-13,00%), carpeta asfáltica Laguna de Busa (3,30%), alcantarillado Checa (-1,20%), alcantarillado Calderón (-0,30%). Estas reducciones, en general moderadas, podrían reflejar eficiencias en la ejecución o ajustes en el alcance.

Por otro lado, se identifican desviaciones positivas relevantes en dos proyectos. En particular, el proyecto de mejoramiento vial Benigno Ordóñez presenta una desviación alta, casi duplicando el plazo inicial (35 días), este caso evidencia que la ejecución de los proyectos depende de múltiples factores; más allá de una adecuada planificación u oportuna gestión por parte de la entidad contratante y los contratistas, la falta de disponibilidad de asfalto a nivel nacional constituyó un factor determinante generando retrasos y afectaciones en los cronogramas previstos.

Asimismo, el proyecto de carpeta asfáltica Gualaceo presenta un incremento en el plazo de ejecución del 21,30%. Este aumento se explica por variaciones significativas en las cantidades de subdrenajes, lo que implicó mayores tiempos de ejecución, así como la necesidad de realizar rediseños geométricos viales debido a discrepancias entre los planos originales y las condiciones reales del terreno. Adicionalmente, se identificó que mientras el proveedor avanzaba con las obras, la municipalidad local inició la instalación de redes de alcantarillado en el mismo trazado. Estas intervenciones externas generaron cierres de vía y desvíos, restringiendo la circulación de maquinaria pesada y reduciendo el rendimiento operativo diario, lo que derivó en una extensión del plazo originalmente previsto

En contraste, el proyecto Disipador El Colegio presenta un cumplimiento exacto del plazo inicial (360 días), lo que evidencia una adecuada planificación y ejecución en términos temporales. Finalmente, el proyecto de asfaltado Chuwitayo–Chapintza y Puente sobre el río Anzu está en ejecución y no presenta información sobre desviación temporal, lo que impide evaluar su desempeño en términos de cumplimiento del plazo constructivo.

Causas de la desviación en el periodo de ejecución



En términos generales, el análisis permite identificar que los principales cuellos de botella se concentran en dos momentos del ciclo del proyecto: (i) la fase de evaluación de ofertas, particularmente en procesos de licitación que implican mayor complejidad técnica y administrativa; y (ii) la etapa posterior a la adjudicación, especialmente en el inicio de obra, donde se registran los mayores niveles de variabilidad. En este último caso, tiempos superiores a los 76 días (promedio) pueden estar asociados a factores como la suscripción de contratos, la entrega de anticipos, la obtención de permisos, la ejecución de obras previas o condiciones logísticas específicas del proyecto. Si bien estos plazos pueden ser consistentes con la naturaleza de ciertos proyectos, también pueden constituir señales de posibles ineficiencias o limitaciones en la planificación y coordinación, por lo que su monitoreo resulta clave.

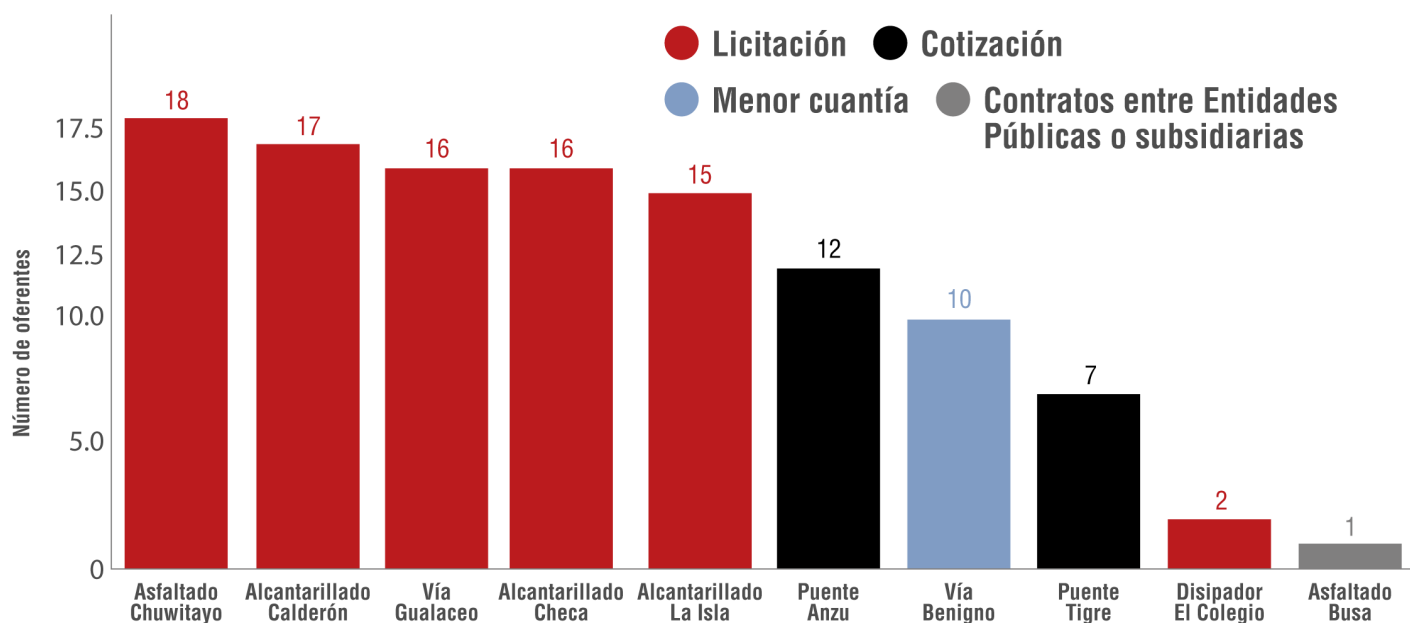
No obstante, dado que el análisis se basa en una muestra de 10 proyectos, estos resultados deben interpretarse como indicativos y no necesariamente representativos del conjunto de la inversión pública, aunque permiten identificar patrones relevantes sobre la gestión temporal de los proyectos evaluados.

3.4.3 Análisis de la concurrencia de oferentes

El análisis del número de oferentes por proceso de contratación permite conocer el nivel de competencia en los proyectos evaluados, constituyendo un indicador relevante para valorar condiciones de mercado y apertura de los procesos. En general, una mayor concurrencia amplía las posibilidades de comparación entre ofertas y puede fortalecer la eficiencia en términos de precio y calidad, mientras que una participación limitada puede reducir la presión competitiva y restringir las opciones disponibles para la entidad contratante.

En esa línea, los proyectos registran un promedio de 11 oferentes por proceso. No obstante, se evidencia una variabilidad entre proyectos, con casos de alta concurrencia y otros con participación limitada.

Número de oferentes por proyecto



Se identifican varios proyectos con alta concurrencia de oferentes, lo que refleja condiciones favorables de competencia. Entre estos destacan asfaltado Chuwitayo–Chapintza (18 oferentes), alcantarillado Calderón (17), así como alcantarillado Checa y carpeta asfáltica Gualaceo (16 cada uno), y alcantarillado la Isla (15). Estos niveles de participación indican procesos atractivos para el mercado y, en principio, mayores posibilidades de obtener ofertas competitivas en términos de precio y calidad.

En un nivel intermedio se ubican proyectos como el mejoramiento vial Benigno Ordoñez (10), puente río Anzu (12 oferentes) y puente río Tigre (7). Estos dos últimos son procesos de cotización que priorizan oferentes por localidad de los Gobiernos Provinciales, buscando promover el desarrollo del sector construcción de la provincia.

Por otro lado, se identifican casos con baja participación, particularmente en el proyecto Disipador El Colegio (2 oferentes) y carpeta asfáltica Laguna de Busa (1 oferente). En el primer caso, la limitada concurrencia se atribuye a la alta especialización técnica y magnitud de la obra, se puede identificar en la plataforma SOCE que la entidad contratante hizo la invitación a 31.590 oferentes, con un detalle CPC de construcción de redes urbanas de alcantarillado, siendo la experiencia específica “la construcción de obras hidráulicas en ríos que tengan capítulos de captaciones, disipadores de energía y obras de control de erosión” y únicamente 2 oferentes optaron por participar.

Por su parte, en Laguna de Busa (1), la participación respondió a un procedimiento especial de contratación entre entidades públicas, que por su naturaleza está diseñado para viabilizar la cooperación interinstitucional, sin una competencia abierta. Este modelo busca que el sector público optimice la gestión de costos.

4. ANÁLISIS DE LAS BRECHAS Y RIESGOS EN EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

● 4.1 Factores habilitantes de desempeño institucional

El análisis se fundamenta en la aplicación del enfoque ACTS (Capacity, Accountability, Trust, Setting), el cual permite evaluar de manera estructurada los factores habilitantes del desempeño institucional en la gestión de proyectos de infraestructura. Este enfoque no se limita a verificar la existencia de normativa o instrumentos formales, sino que analiza la capacidad real de las entidades para implementar, sostener y verificar procesos de gestión de manera efectiva.

En este marco:

- Capacity (Capacidad) evalúa la disponibilidad de recursos, competencias técnicas y sistemas de gestión.
- Accountability (Responsabilidad) analiza la trazabilidad, transparencia y mecanismos de control y rendición de cuentas.
- Trust (Confianza) examina la legitimidad y credibilidad de los procesos frente a los actores involucrados.
- Setting (Entorno institucional) considera las condiciones estructurales, normativas e incentivos que sostienen el desempeño.

A partir de este enfoque y de la evaluación de procesos a nivel de proyecto, se evidencia que las principales vulnerabilidades no se concentran en la ausencia de marcos normativos o instrumentos técnicos, sino en brechas en capacidades habilitantes que limitan su implementación efectiva.

De forma consistente, los hallazgos muestran que, aunque existen especificaciones técnicas robustas, procesos formales de contratación y cumplimiento general de la normativa, estos no se traducen de manera sistemática en información verificable, monitoreo continuo ni control efectivo durante la ejecución.

Desde una perspectiva sistémica, estas brechas presentan una interdependencia estructural: las limitaciones en transparencia y gestión de la información afectan la trazabilidad; esto debilita el monitoreo del desempeño y, a su vez, reduce la capacidad de control y de anticipación institucional. En paralelo, la ausencia de incentivos y de estandarización limita la consolidación de buenas prácticas entre entidades.

Matriz de brechas en factores habilitantes

Capacidad crítica	Capacidad esperada (mandato / estándar)	Evidencia observada (hallazgos, riesgos y entidades asociadas)	Brecha institucional identificada	Riesgo institucional asociado
Capacidad técnica y operativa (Capacity)	Equipos técnicos suficientes, especializados y con sistemas de gestión estandarizados	En el Gobierno Provincial de Pastaza se identifican limitaciones de personal en planificación, obras y fiscalización; en EPMAPS se observa alta capacidad técnica y operativa; en el Gobierno Provincial del Azuay existe también una limitación en personal, en especial en el número de administradores de contrato, que supervisan varias obras; se identifica también limitados sistemas integrados de gestión en los proyectos de infraestructura, información dispersa entre varias direcciones (Gobiernos Provinciales de Azuay y Pastaza)	Brecha en capacidades y en la institucionalización de sistemas integrados de gestión	Calidad de ejecución y dependencia de capacidades individuales
Transparencia y trazabilidad (Accountability)	Información completa, oportuna y accesible durante todo el ciclo del proyecto	En Gobierno Provincial de Pastaza se identifican restricciones de acceso a información (ordenanzas provinciales N.127 y reformatoria N.129 ¹⁰) y limitada trazabilidad durante la ejecución de los proyectos, en especial en los proyectos del puente río Tigre y río Anzu; en proyectos del Gobierno Provincial del Azuay se evidencia falta de publicación o publicación extemporánea de información en SOCE y en el caso de proyectos 100% operativos como la carpeta asfáltica Laguna de Busa y Benigno Ordóñez continúan sin sus actas de recepción publicadas; en EPMAPS existe mayor disponibilidad, aunque con limitaciones puntuales en la publicación oportuna de ciertos elementos. En cuanto al principio de oportunidad, se registraron demoras en la entrega de información en las tres entidades evaluadas.	Brecha entre generación de información y su publicación oportuna y verificable	Limitación del control social e independiente
Control de calidad y monitoreo (Accountability)	Sistemas de control con reportes periódicos, ensayos verificables y monitoreo continuo	En Gobierno Provincial de Pastaza y Gobierno Provincial del Azuay se observa limitada disponibilidad pública de ensayos y reportes de calidad durante la ejecución; en EPMAPS existen mecanismos más estructurados, aunque no siempre accesibles públicamente en tiempo real.	Brecha entre control técnico declarado y verificación externa efectiva	Imposibilidad de validar externamente la calidad de las obras
Monitoreo del desempeño (Accountability)	Seguimiento continuo con indicadores de avance físico y financiero	En Gobierno Provincial de Pastaza y Gobierno Provincial del Azuay se observa ausencia en la publicación de indicadores intermedios y seguimiento sistemático (planillas); en EPMAPS existe monitoreo, aunque no siempre publicado de forma accesible durante la ejecución.	Brecha analítica en la medición del desempeño	Baja capacidad de anticipación y corrección de desviaciones
Entorno institucional e incentivos (Setting)	Sistemas que promuevan eficiencia, calidad e innovación mediante incentivos	En las tres entidades (Gobierno Provincial de Pastaza, EPMAPS, Gobierno Provincial del Azuay) no se evidencian mecanismos explícitos de incentivos al desempeño; el cumplimiento se centra en la normativa y estándares nacionales.	Brecha en la promoción del desempeño	Limitada mejora continua y ausencia de incentivos a eficiencia y calidad

10. Consulta la ordenanza y sus reformas:
<https://drive.google.com/file/d/1VCWFnWxt-OVK8WJsPUAFhBWlq3NIU4Zv/view?usp=sharing>
<https://drive.google.com/file/d/1cXRHI-01X6eYncm8BjBou7klBCz1DCul/view?usp=sharing>

● 4.2 Brechas en la gestión de proyectos: riesgos operativos

El análisis evidencia que los riesgos en la gestión de los proyectos no responden a la ausencia de marcos normativos o técnicos, sino a limitaciones en su implementación, particularmente en las fases de ejecución y cierre, donde la información disponible es parcial, extemporánea o inexistente. A continuación, se detallan los principales riesgos identificados a partir de los hallazgos observados

Matriz de riesgos operativos

Proceso de gestión	Riesgo identificado	Evidencia observada (hallazgos y entidades asociadas)
Preparación del proyecto y diseño	Ajustes en obra, incremento de costos y afectación a la estabilidad de la infraestructura	Riesgos de deslizamientos y problemas no previstos en EPMAPS (Proyecto Disipador El Colegio y Alcantarillado la Isla); El proyecto alcantarillado la Isla se ejecutó en 2022 con un diseño elaborado en 2013, esta brecha de 9 años provocó que las cotas topográficas actuales no coinciden con los diseños originales del liner, obligando a realizar rediseños sobre la marcha. En el proyecto Disipador El Colegio se registraron riesgos de deslizamientos.
Gestión de licitaciones	Riesgo de limitación de competencia efectiva	Caso de un solo oferente en Gobierno Provincial del Azuay (Proyecto carpeta asfáltica Laguna de Busa) y dos oferentes EPMAPS (Proyecto Disipador El Colegio).
Gestión de calidad	Imposibilidad de validar externamente el cumplimiento técnico	Aunque existen especificaciones técnicas robustas (INEN, ASTM, AASHTO), en múltiples proyectos no se dispone de resultados de ensayos o reportes durante la ejecución (Gobiernos Provinciales de Pastaza y Azuay); en EPMAPS hay controles estructurados pero no siempre accesibles (Proyecto alcantarillado Checa)

Proceso de gestión	Riesgo identificado	Evidencia observada (hallazgos y entidades asociadas)
Gestión ambiental y social	Riesgos en sostenibilidad	Cumplimiento general sin evidencia detallada en Gobierno Provincial Pastaza y Gobierno Provincial del Azuay; Planes de manejo ambiental estructurados en EPMAPS.
Gestión de seguridad y salud	Cumplimiento normativo sin estandarización internacional	En la mayoría de proyectos se exige normativa nacional, pero no sistemas certificados (ISO 45001) ni evidencia sistemática de monitoreo continuo.
Gestión del tiempo (plazos)	Retrasos, incremento de costos y pérdida de eficiencia	Desviaciones altas en Gobierno Provincial del Azuay (Proyecto carpeta asfáltica Gualaceo) y EPMAPS (Proyecto Disipador El Colegio y alcantarillado Checa)
Gestión de la información	Retrasos en la entrega de información mediante solicitud	Información entregada con retrasos superiores a los 44 días. (Gobiernos Provinciales de Pastaza y Azuay).
Gestión interinstitucional	Retrasos en la ejecución de los proyectos	En el proyecto Alcantarillado la Isla (EPMAPS), la falta de acceso oportuno a planos As-Built de una vía concesionada paralizó la obra, evidenciando ausencia de interoperabilidad institucional.
Monitoreo del desempeño	Limitada capacidad de control y toma de decisiones oportuna	Información concentrada en estados iniciales en Gobierno Provincial de Pastaza y Gobierno Provincial del Azuay; monitoreo existente pero no siempre accesible en EPMAPS.
Seguridad del proyecto y usuario final	Afectación a la funcionalidad, seguridad y vida útil de la infraestructura	Problemas de mantenimiento y drenaje en EPMAPS (Alcantarillado la Isla) y preocupa que los taludes aledaños a la obra siguen siendo inestables (Disipador El Colegio); deficiencias en cunetas en Gobierno Provincial del Azuay (carpeta asfáltica Gualaceo).

● 4.3 Valor por el dinero

El análisis del valor por el dinero (Value for Money) es el resultado de considerar la eficiencia, eficacia, la economía, la competencia y la sostenibilidad, en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura.

En términos generales, los proyectos evaluados muestran resultados positivos en su funcionalidad y calidad física, con obras que cumplen sus objetivos principales en términos de conectividad, saneamiento y mitigación de riesgos. No obstante, se identifican brechas en la gestión de la información, la planificación, el monitoreo y la articulación institucional, que limitan la capacidad de asegurar, de forma consistente y verificable, que el Estado esté obteniendo el máximo valor por los recursos invertidos.

A continuación, se presenta el análisis de este enfoque a través de 4 grupos:

Grupo 1: Planificación y diseño de los proyectos

El análisis evidencia que, si bien los proyectos logran en su mayoría resultados funcionales adecuados, existen brechas importantes en las fases de planificación y diseño que afectan la eficiencia global de la inversión.

Desde la evaluación documental, se identifican brechas en la disponibilidad de información clave en la fase de preparación (90%) y, especialmente, en la fase de finalización (42%), lo que limita la trazabilidad completa del ciclo del proyecto. A esto se suma la ausencia de información detallada sobre estudios de ingeniería, análisis de alternativas y justificaciones técnicas.

Los hallazgos de campo confirman que estas brechas no son únicamente documentales, sino que tienen efectos reales en la ejecución. Casos como el proyecto de alcantarillado la Isla evidencian desfases significativos entre los estudios (2013) y la ejecución (2022), lo que generó rediseños, retrasos y ajustes en obra debido a cambios en condiciones demográficas y topográficas. De forma similar, el proyecto Disipador El Colegio presentó riesgos geotécnicos no completamente anticipados, lo que evidencia limitaciones en los estudios previos. Estas situaciones se alinean con las brechas identificadas en capacidades institucionales, particularmente en la disponibilidad de equipos técnicos y sistemas de gestión integrados, lo que limita la calidad de la estructuración inicial de los proyectos.

En este contexto, el principal riesgo para el valor por el dinero es que deficiencias en la planificación y diseño generen ajustes durante la ejecución, incrementando costos, ampliando plazos y reduciendo la eficiencia de la inversión pública.

Grupo 2: Procesos efectivos de licitación de los proyectos

Los procesos de contratación presentan, en términos generales, niveles adecuados de transparencia formal y competencia, aunque con variaciones relevantes entre proyectos.

Desde el análisis cuantitativo, se observa un alto nivel de divulgación en la fase de licitación (98% proactiva y 100% reactiva), lo que refleja un cumplimiento generalizado en la publicación de información en el SOCE. Asimismo, el promedio de 11 oferentes por proceso sugiere condiciones favorables de competencia en la mayoría de los casos.

Sin embargo, se identifican excepciones relevantes. Proyectos como el Disipador El Colegio (2 oferentes) y Laguna de Busa (1 oferente) evidencian niveles limitados de concurrencia. Si bien en estos casos existen justificaciones técnicas o procedimentales (especialización o contratación entre entidades públicas), la baja participación reduce la presión competitiva y limita las posibilidades de optimizar precios y calidad.

Adicionalmente, desde la perspectiva institucional, se identifican limitaciones en la capacidad de las comisiones evaluadoras y en la trazabilidad de los procesos, lo que puede afectar la calidad de la selección. Las visitas de campo confirman que, aunque no se evidencian conflictos relevantes en la adjudicación, la confianza en los procesos se sustenta más en el cumplimiento formal que en la transparencia integral del ciclo.

En este grupo, el riesgo para el valor por el dinero se relaciona con la posibilidad de que procesos con baja concurrencia o con limitaciones en la evaluación técnica no seleccionen necesariamente la opción más eficiente o idónea.

Grupo 3: Procesos de gestión de proyectos y de sus contratos

Este grupo concentra las principales brechas que afectan el valor por el dinero, particularmente en la fase de ejecución, donde se materializan los riesgos asociados a planificación, contratación y gestión.

El análisis de divulgación muestra que la fase de implementación presenta el nivel más bajo de transparencia (37% proactiva), lo que limita significativamente la trazabilidad de la ejecución. Esta brecha se refleja también en la precisión de los datos, donde el 21% de la información es faltante, especialmente en aspectos clave como modificaciones contractuales, avances físicos y financieros, y resultados de control de calidad. Dada esta situación, se dificulta verificar si los contratistas llevaron a cabo, de forma completa, el trabajo para lo que fueron contratados.

Desde el análisis de desempeño, se identifican desviaciones tanto en costos (hasta +12,02% y -21,73%) como en tiempos (hasta +77,1%), evidenciando variabilidad en la gestión de los proyectos. Si bien algunas variaciones responden a mecanismos contractuales formales, la acumulación de modificaciones sugiere debilidades en la estructuración inicial.

Las brechas institucionales refuerzan este diagnóstico, destacando limitaciones en monitoreo del desempeño, control de calidad y sistemas de información. Estas limitaciones reducen la capacidad de anticipar desviaciones y de implementar acciones correctivas oportunas.

Los hallazgos de campo confirman la existencia de estas brechas. Se observó que la ausencia de información en el SOCE impidió validar el desempeño en costos y plazos. En otros casos, se evidenciaron problemas de coordinación interinstitucional que generaron retrasos, como en el acceso a información técnica clave (planos As-Built).

No obstante, es importante destacar que, a pesar de estas limitaciones, las obras presentan en general una alta calidad física y cumplen sus objetivos funcionales, lo que indica que las capacidades técnicas operativas permiten sostener resultados, aunque con limitaciones en el proceso.

Grupo 4: Relevancia de los servicios recibidos por la sociedad

El análisis muestra que los proyectos, en su mayoría, generan beneficios concretos y relevantes para la población, particularmente en términos de acceso, conectividad, saneamiento y reducción de riesgos.

Desde la caracterización de los proyectos y la validación en campo, se evidencia que las obras cumplen funciones críticas: reducción de tiempos de viaje, acceso a servicios básicos, mitigación de riesgos y mejora en la calidad de vida. En general, la infraestructura responde a necesidades reales del territorio.

Sin embargo, se identifican brechas en la interacción con la ciudadanía y en la incorporación de sus necesidades durante el ciclo del proyecto. Las visitas de campo evidencian limitaciones en la socialización, particularmente en la fase de ejecución y operación. El caso del alcantarillado Checa muestra que, pese a cumplir técnicamente, la falta de comunicación con la comunidad generó costos adicionales y molestias evitables.

Asimismo, desde la perspectiva institucional, se identifican debilidades en la gestión social y ambiental, con limitada disponibilidad de información detallada y evidencia de implementación de planes ambientales y sociales.

5.RESULTADOS DE VISITAS IN SITU Y ENTREVISTAS

Las visitas técnicas realizadas a los proyectos seleccionados permitieron validar, matizar y en algunos casos corregir los hallazgos preliminares derivados del análisis documental y de los sistemas oficiales. Este proceso se sustentó en la triangulación de evidencia proveniente de: (i) inspección física de obras, (ii) contraste con información publicada en el SOCE y CoST Ecuador, y (iii) interacción directa con actores clave del sector público, contratistas y usuarios de la infraestructura.

En este contexto, los resultados no solo describen el estado de los proyectos, sino que explican cómo los hallazgos emergentes se confirman o ajustan a partir de evidencia empírica en campo, fortaleciendo la robustez del análisis.

● 5.1 Transparencia activa y proactiva

Las visitas in situ confirmaron que la información disponible en el SOCE no refleja de forma adecuada el estado real de los proyectos:

En proyectos del Gobierno Provincial de Pastaza, la inspección física evidenció obras terminadas o en fases avanzadas, mientras que en el SOCE estas constaban en estados iniciales o intermedios. Esta inconsistencia fue corroborada mediante revisión de campo y contraste con información disponible públicamente, confirmando la desactualización de los registros administrativos. La interacción con actores locales permitió establecer que la ejecución avanzó con normalidad, pero sin un correlato en la actualización documental, lo que limita la trazabilidad.

En el Gobierno Provincial del Azuay, si bien la información contractual existe, se confirmó que su publicación es posterior a la ejecución. En EPMAPS, las visitas permitieron confirmar que la información es estructurada y disponible; sin embargo, se identificaron limitaciones en la integración y actualización oportuna de información técnica.

La interacción con comunidades y usuarios finales evidenció asimetrías de información, particularmente en la fase de operación. Por ejemplo, en el Proyecto de alcantarillado de Checa, se evidenció que, aunque la EPMAPS cumplió con los protocolos formales de inicio y cierre de obra, hubo debilidades en la socialización del proyecto. Ciudadanos del lugar no se enteraron del momento exacto para realizar sus acometidas domiciliarias, lo que les obliga a realizar trámites burocráticos y que existan roturas de vía posteriores, que pudieron haberse evitado con una mejor gestión comunitaria.

● 5.2 Costos, duración y plazos

Las inspecciones técnicas corroboraron que, en términos generales, los proyectos presentan:

- Alta calidad de ejecución física, sin evidencia de fallas estructurales relevantes.
- Cumplimiento funcional de los objetivos de infraestructura (conectividad, saneamiento, mitigación de riesgos).

Las interacciones con actores y el análisis de campo evidenciaron elementos que no eran plenamente visibles en la revisión documental:

En proyectos de EPMAPS:

Alcantarillado la Isla: Aunque la obra final tiene excelente calidad, la ejecución sufrió retrasos por deficiencias de diseño originadas por un desfase de los estudios de consultoría que se realizaron en 2013, pero la construcción inició en 2022. En esos 9 años, la demografía cambió, requiriendo nuevas redes no planificadas. Adicionalmente, los diseños del liner no coincidían con las cotas reales del terreno. La solución a este problema técnico fue lenta porque la obra atravesaba una vía concesionada y la EPMAPS no pudo acceder oportunamente a los planos As-Built (planos de construcción final) de dicha concesión, revelando falta de coordinación entre instituciones.

Disipador El Colegio: las entrevistas revelaron que su ejecución no nació de una planificación estratégica municipal preventiva, sino como una respuesta reactiva a la presión ciudadana. Preocupa además que los taludes aledaños a la obra siguen siendo inestables.

En proyectos del GAD Azuay:

Gualaceo – Cahuazhún: fallas prematuras en carpeta asfáltica. Tras la transferencia del mantenimiento al municipio, se evidencia una falta de mantenimiento de las cunetas.

Carpeta asfáltica Laguna de Busa (San Fernando) y Benigno Ordóñez: Ambas obras presentan un excelente estado físico, con asfalto y cunetas bien mantenidas.

En el GAD Pastaza:

Puentes río Tigre y río Anzu y asfaltado Chuwitayo–Chapintza: ausencia de planillas, informes de calidad y avances financieros en el SOCE. Esto impidió validar plenamente el desempeño en costos y plazos, confirmando la falta de trazabilidad documental.

● 5.3 Competencia y participación

La interacción con actores institucionales y técnicos permitió confirmar que:

- Los procesos de contratación se desarrollan bajo marcos formales que generan confianza en la adjudicación, sin evidencia de conflictos relevantes entre partes. Este hallazgo fue consistente entre entidades y se mantuvo sin ajustes significativos tras las visitas.

6. REUNIONES DE VALIDACIÓN CON LAS ENTIDADES EVALUADAS

Las reuniones de validación permitieron contrastar los hallazgos del análisis documental y de campo con la perspectiva institucional de las entidades evaluadas, confirmando la pertinencia de los principales resultados del informe, pero también aportando elementos explicativos sobre las brechas identificadas. De forma transversal, las observaciones se concentraron en limitaciones operativas, prácticas internas de gestión de información y particularidades territoriales que inciden en la ejecución y transparencia de los proyectos.

Como resultado de estas reuniones, las entidades manifestaron su compromiso de trabajar en una hoja de ruta de acciones orientadas a mejorar la calidad, oportunidad y acceso a la información, así como la eficiencia de los proyectos de infraestructura.

● Gobierno Provincial del Azuay

Desde el Gobierno Provincial del Azuay, se destacó que este tipo de evaluaciones y seguimientos constituyen una oportunidad para fortalecer procesos de mejora continua. En relación con la disponibilidad de información en el portal de compras públicas, el Gobierno Provincial indicó que se han impartido directrices a los equipos técnicos y administradores de contrato para asegurar la publicación oportuna y completa de la información en el SOCE. No obstante, se reconoció que mantener la información actualizada representa un desafío, debido a la limitada disponibilidad de personal técnico, ya que un mismo administrador suele estar a cargo de múltiples proyectos y convenios. A pesar de estas limitaciones, se evidenciaron avances concretos. Por ejemplo, en el proyecto Gualaceo–Cahuazhún se ha logrado registrar en el portal el estado de finalización, incluyendo actas, planillas y anexos correspondientes.

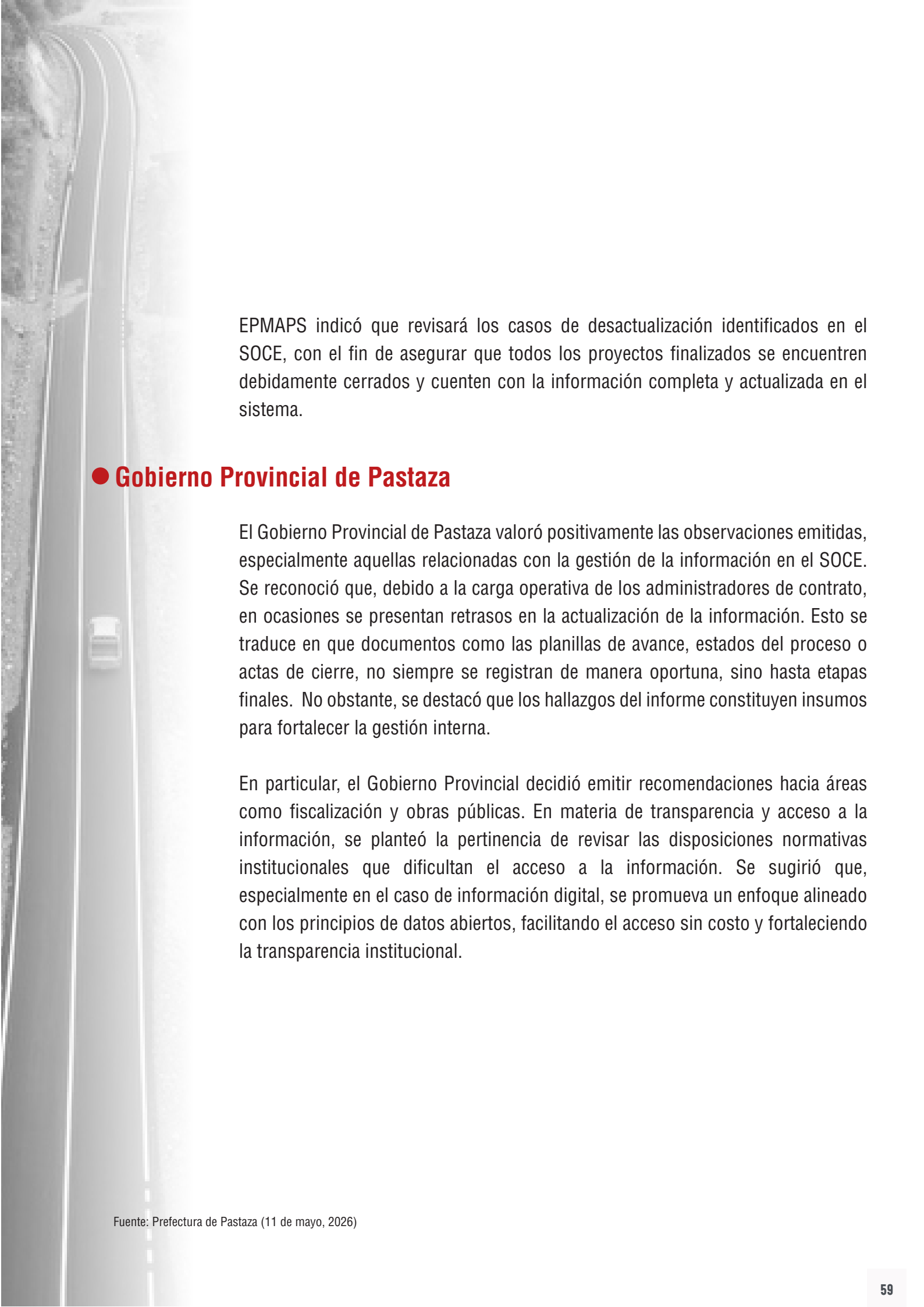
Asimismo, se señaló que las características específicas de cada proyecto inciden en su ejecución. En ciertos casos, como el proyecto carpeta asfáltica Laguna de Busa, el Gobierno Provincial ejecuta parte de las obras mediante capacidad operativa propia, mientras que otros componentes se contratan bajo regímenes especiales. Estas modalidades pueden generar desfases, especialmente en las etapas iniciales. En cuanto a aspectos sociales, se indicó que la mayoría de intervenciones viales se realizan sobre vías ya existentes y consolidadas, por lo que no suelen requerir procesos de expropiación, reasentamiento o compensación. No obstante, se reconoció la necesidad de documentar de manera más detallada estas condiciones en los informes correspondientes.

Respecto a la participación de oferentes, se destacó que esta varía según la ubicación geográfica de los proyectos. Mientras que en zonas cercanas a centros urbanos como Cuenca se registra una mayor concurrencia, en localidades más alejadas el número de oferentes es reducido. A pesar de ello, el Gobierno Provincial procura diseñar pliegos abiertos y sin restricciones innecesarias, con el fin de fomentar la participación y garantizar la transparencia en los procesos.

● EPMAPS

La EPMAPS ratificó su disposición para continuar colaborando en iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia y la gestión de la información en los proyectos de infraestructura.

En relación con los resultados obtenidos, la entidad señaló que las observaciones en el proyecto con menor desempeño responden, en parte, a prácticas internas de gestión de la información, particularmente a la carga de planillas en el Sistema Oficial de Contratación Pública (SOCE) una vez concluido el proceso contractual. Si bien esta dinámica puede generar desfases en la disponibilidad oportuna de información durante la ejecución del proyecto, la EPMAPS manifestó que es una práctica institucional que salvaguarda la integridad de los datos.



EPMAPS indicó que revisará los casos de desactualización identificados en el SOCE, con el fin de asegurar que todos los proyectos finalizados se encuentren debidamente cerrados y cuenten con la información completa y actualizada en el sistema.

● Gobierno Provincial de Pastaza

El Gobierno Provincial de Pastaza valoró positivamente las observaciones emitidas, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de la información en el SOCE. Se reconoció que, debido a la carga operativa de los administradores de contrato, en ocasiones se presentan retrasos en la actualización de la información. Esto se traduce en que documentos como las planillas de avance, estados del proceso o actas de cierre, no siempre se registran de manera oportuna, sino hasta etapas finales. No obstante, se destacó que los hallazgos del informe constituyen insumos para fortalecer la gestión interna.

En particular, el Gobierno Provincial decidió emitir recomendaciones hacia áreas como fiscalización y obras públicas. En materia de transparencia y acceso a la información, se planteó la pertinencia de revisar las disposiciones normativas institucionales que dificultan el acceso a la información. Se sugirió que, especialmente en el caso de información digital, se promueva un enfoque alineado con los principios de datos abiertos, facilitando el acceso sin costo y fortaleciendo la transparencia institucional.

7. HALLAZGOS CLAVE

El análisis de los diez proyectos evaluados permiten concluir que, en términos generales, las entidades muestran avances relevantes en la publicación y disponibilidad de información sobre infraestructura pública; sin embargo, persisten brechas que limitan la trazabilidad, la comparabilidad y la verificación independiente del desempeño de los proyectos. En promedio, la divulgación alcanzó 80% en modalidad proactiva y 78% en modalidad reactiva, lo que refleja un nivel medio-alto de transparencia.

En la dimensión de divulgación, los mejores resultados se concentran en las fases iniciales y contractuales, mientras que las mayores debilidades se observan en la finalización e implementación. La fase de identificación registra 100% de divulgación proactiva y la fase de gestión de licitación llega a 98%; en contraste, la fase de finalización desciende a 42% y la fase de implementación a 37%, evidenciando que la información sobre cierre, avances de obra, pagos, modificaciones contractuales y control de calidad no se publica de manera sistemática. En modalidad reactiva, aunque la cobertura mejora en contratación e implementación, persisten limitaciones en ejecución y cierre, y los tiempos de respuesta pueden extenderse hasta 78 días, por encima de lo previsto en la LOTAIP.

Respecto de la precisión de la información, el 77% de los datos evaluados resultó plausible, menos del 3% presentó inconsistencias y 21% correspondió a información faltante, lo que confirma que la principal debilidad no es tanto la presencia de datos erróneos, sino la incompletitud de los registros. Esta situación afecta la capacidad de validar la coherencia entre planificación, ejecución y resultados, especialmente cuando no se dispone de evidencia suficiente sobre cierre, variaciones contractuales y auditorías o evaluaciones finales.

En el plano financiero, los proyectos muestran variaciones contractuales significativas, aunque en la mayoría de los casos asociadas a mecanismos formales como órdenes de trabajo, órdenes de cambio, contratos complementarios y reajustes por fórmula polinómica. Se identifican incrementos de hasta 12,02% y reducciones de hasta -21,73%, lo que evidencia que existe una gestión activa de los contratos, pero también una sensibilidad importante a ajustes durante la ejecución. La trazabilidad de estas modificaciones es un avance relevante; no obstante, en algunos casos la documentación pública sigue siendo limitada para comprender plenamente las causas y efectos de las desviaciones observadas.

En términos temporales, la fase de adjudicación e inicio de obra presenta la mayor variabilidad, con promedios elevados y casos que superan ampliamente el comportamiento general. A ello se suma que varias obras registran desviaciones de plazo relevantes, mientras otras finalizan antes de lo previsto o exactamente dentro del cronograma. En conjunto, esto muestra que la gestión temporal no sigue un patrón uniforme y que la eficiencia depende en gran medida de la capacidad operativa específica de cada entidad y proyecto.

En cuanto a la competencia, el promedio de 11 oferentes por proceso sugiere un nivel de concurrencia razonable. Sin embargo, la presencia de procesos con baja participación, incluyendo uno con un solo oferente y otros con dos o siete, obliga a considerar la naturaleza del proceso de contratación, especificidades técnicas o condiciones del proceso que pueden reducir la competencia efectiva. Aunque no se trata de una tendencia generalizada, estos casos deben analizarse con mayor profundidad por su potencial impacto en eficiencia y valor por dinero.

Desde la perspectiva institucional, los hallazgos confirman que las principales debilidades no se explican por ausencia normativa, sino por brechas en capacidad, trazabilidad, control y publicación oportuna de la información. El enfoque ACTS evidencia limitaciones en capacidad técnica y operativa en algunas entidades, dispersión de la información, debilidades en el monitoreo del desempeño y ausencia de incentivos explícitos para promover eficiencia, innovación y mejora continua.

Los proyectos evaluados cuentan con bases técnicas y administrativas que permiten ejecutar infraestructura pública, pero todavía presentan vacíos importantes en transparencia activa, calidad de datos, monitoreo continuo y cierre documental de los proyectos. Por ello, el principal desafío no es únicamente seguir construyendo obra pública, sino consolidar sistemas de gestión que aseguren información verificable, oportuna, completa y útil para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la confianza pública.

8. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones recogen de manera integrada los hallazgos derivados del análisis. Se priorizan acciones orientadas a fortalecer las capacidades habilitantes transversales, particularmente en gestión de la información, calidad de la planificación, eficiencia en la ejecución contractual y mejora del impacto en el usuario final.

Planificación y estructuración del proyecto

Se sugiere fortalecer la calidad de la fase de planificación y diseño, incorporando revisiones técnicas obligatorias de vigencia de estudios antes de la contratación. En casos de desfase temporal relevante, se debe exigir la actualización de diseños, reduciendo rediseños en obra, retrasos y uso ineficiente de recursos públicos.

Se recomienda fortalecer la definición del alcance y la estructuración inicial de los proyectos mediante la incorporación de análisis de factibilidad integrales (técnicos, económicos, sociales y ambientales) y la validación de programas de ejecución realistas en la fase precontractual. Esto implica establecer criterios mínimos de madurez del proyecto como condición previa para licitar, lo que permitirá reducir incertidumbre, evitar ajustes significativos en obra y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos públicos.

Se recomienda adoptar un esquema de identificación de proyectos independiente de los procesos de contratación, que permita agrupar múltiples contratos, alineado con estándares internacionales de transparencia en infraestructura como el Estándar de Contratación Abierta para Datos de Infraestructura (OC4IDS).

Divulgación

Se recomienda a las entidades contratantes cerrar la brecha entre el avance físico de las obras y la información publicada en los sistemas oficiales (SOCE), mediante la implementación de protocolos obligatorios de actualización de información vinculados a hitos del ciclo de vida del proyecto. Este proceso puede potenciarse mediante el uso de estándares de datos abiertos como el Estándar de Contratación Abierta para Datos de Infraestructura (OC4IDS) y la integración con plataformas como CoST Ecuador, fortaleciendo la trazabilidad y el control concurrente.

Se recomienda revisar y ajustar los marcos normativos subnacionales que regulan el acceso y la provisión de información pública, a fin de asegurar su coherencia con la normativa nacional y estándares de contratación abierta, reduciendo asimetrías de información y fortaleciendo la rendición de cuentas.

Se recomienda fortalecer los mecanismos institucionales de gestión de solicitudes de acceso a la información pública, articulando con procesos de centralización y gestión documental, estableciendo plazos internos, procedimientos estandarizados y sistemas de monitoreo que permitan reducir retrasos y mejorar la oportunidad de respuesta.

Concurrencia y evaluación de ofertas

Se recomienda institucionalizar indicadores de competencia en los procesos de contratación, tales como el número de oferentes por proceso, la tasa de procesos con un solo oferente y el nivel de concentración de adjudicatarios, incorporando su monitoreo sistemático y análisis periódico, lo que permitirá identificar patrones, sectores o entidades con baja concurrencia y diseñar intervenciones focalizadas para fortalecer la competencia efectiva.

Se recomienda fortalecer las capacidades técnicas de las comisiones evaluadoras mediante procesos de capacitación especializada, incorporando su aplicación sistemática en los procesos de contratación, lo que permitiría mejorar la calidad del análisis técnico de las ofertas, reducir la discrecionalidad en la evaluación y fortalecer la transparencia y confianza en los resultados de los procesos.

Gestión precontractual y contractual

Se recomienda fortalecer la gestión de los tiempos de licitación y de los plazos contractuales mediante cronogramas realistas desde la fase precontractual, incorporando análisis de riesgos y sistemas de seguimiento continuo de hitos clave con alertas tempranas, lo que permitirá mejorar la previsibilidad y reducir retrasos.

Se recomienda institucionalizar la gestión integral de cambios contractuales, mediante matrices de control que obliguen a justificar técnica y financieramente cualquier modificación de plazo, costo o alcance, asegurando su trazabilidad y publicación oportuna.

Se recomienda institucionalizar mecanismos formales de coordinación interinstitucional a lo largo de todo el ciclo del proyecto, mediante la definición de protocolos, roles y flujos de información claramente establecidos entre las entidades involucradas, reduciendo cuellos de botella y mejorando la eficiencia operativa.

Se sugiere implementar herramientas digitales de gestión de obra (bitácoras digitales), que permitan registrar avances físicos, planillas y eventos críticos en tiempo real desde el campo, mejorando la calidad de la información, reduciendo rezagos administrativos y fortaleciendo el control concurrente.

Se recomienda diseñar e implementar mecanismos que reconozcan el buen desempeño en la gestión de proyectos, incorporando indicadores relacionados con el cumplimiento de plazos, control de costos y estándares de calidad, junto con su monitoreo sistemático y evaluación periódica, lo que permitirá incentivar prácticas eficientes, promover la mejora continua y fortalecer la gestión orientada a resultados en las entidades ejecutoras.

Resultados, calidad e impacto del servicio

Se sugiere mejorar la verificabilidad externa de la calidad, ambiente y seguridad mediante la estandarización en la generación, registro y publicación de ensayos de laboratorio, monitoreos ambientales, reportes de seguridad y salud ocupacional y demás evidencias de cumplimiento, incorporando estos productos como requisito de pago y control.

Se recomienda fortalecer la gestión documental de los proyectos mediante la estandarización de registros que permitan acreditar de forma explícita la existencia o inexistencia de instrumentos clave, como evaluaciones de impacto en tierras, planes de reasentamiento y compensación y auditorías, mejorando la trazabilidad y la capacidad de verificación.

Se recomienda diseñar e implementar estrategias de comunicación y participación ciudadana durante todo el ciclo del proyecto, más allá de los hitos formales de inicio y cierre, con el fin de mejorar la apropiación social de la infraestructura, reducir costos posteriores y fortalecer el impacto de las intervenciones.

Se sugiere que, en el marco del enfoque de Gobierno Abierto, las entidades promuevan espacios de colaboración con academia y sociedad civil para el análisis independiente, monitoreo ciudadano y generación de evidencia, contribuyendo a fortalecer la confianza pública y el valor por el dinero.

Se recomienda participar en procesos de revisión independiente futuros mediante la incorporación de enfoques sectoriales y mecanismos de seguimiento post-ejecución de la obra, lo que permitirá identificar brechas específicas en la calidad de las obras, analizar patrones y riesgos recurrentes por sector, y evaluar la sostenibilidad y desempeño de los proyectos a lo largo del tiempo.

9. BIBLIOGRAFÍA

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2024). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Registro Oficial Suplemento 303.

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2024). Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Registro Oficial Suplemento 306.

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2024). Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Registro Oficial Suplemento 337.

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2024). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP). Registro Oficial Suplemento 395.

Asamblea Nacional de la República del Ecuador. (2025). Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Registro Oficial Cuarto Suplemento No. 140.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social [CPCCS]. (s.f.). Portal Oficial del CPCCS. <https://www.cpccs.gob.ec/>

Contraloría General del Estado. (s.f.). Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado. <https://www.contraloria.gob.ec/>

CoST – Infrastructure Transparency Initiative. (2025). Estándar de Datos de Infraestructura (IDS).

CoST – Infrastructure Transparency Initiative. (s.f.). Sitio Oficial de CoST Internacional. <https://infrastructuretransparency.org/>

CoST Ecuador. (s.f.). Sitio Oficial de CoST Ecuador. <https://costecuador.org/>

Defensoría del Pueblo. (2025). Portal Nacional de Transparencia. <https://transparencia.dpe.gob.ec/>

Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito [EPMAPS]. (s.f.). Portal Oficial de Agua de Quito. <https://www.aguaquito.gob.ec/>

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza [GADPPz]. (2023). Ordenanza Nro. 127: Cobro de tasas por servicios administrativos del GADPPz.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza [GADPPz]. (2023). Ordenanza Nro. 129: Reformatoria a la Ordenanza Nro. 127, que establece el cobro de tasas por servicios administrativos.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza [GADPPz]. (s.f.). Portal Oficial de la Prefectura de Pastaza. <https://pastaza.gob.ec/>

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay. (s.f.). Portal Oficial de la Prefectura del Azuay. <https://www.azuay.gob.ec/>

Open Contracting Partnership. (2024). Open Contracting Data Standard (OCDS). <https://www.open-contracting.org/>

Presidencia de la República del Ecuador. (2022). Reglamento general a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Decreto Ejecutivo No. 458). Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 87.

Presidencia de la República del Ecuador. (2025). Reglamento general de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (Decreto Ejecutivo No. 193). Séptimo Suplemento del Registro Oficial No. 155.

Servicio Nacional de Contratación Pública [SERCOP]. (s.f.). Portal de Contrataciones Abiertas Ecuador. <https://datosabiertos.compraspublicas.gob.ec/plataforma/>

Servicio Nacional de Contratación Pública [SERCOP]. (s.f.). Sistema Oficial de Contratación del Estado (SOCE). <https://www.compraspublicas.gob.ec>

10. ANEXOS

Anexo 1. Fichas de los proyectos

Anexo 2. Fotografías de las visitas de campo



www.costecuador.org

